



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO	
Despacho Legislativo	
Fecha	30 JUN. 1993
Hora	9:15a.
Firma	<i>[Signature]</i>
RECIBIDO	

MAYORIA
DESPACHO LEGISLATIVO
Comunicado con Oficio No. 2737-CCD-DL

RECIBIDO	
OFICIALIA MAYOR DEL C.C.D.	
Fecha	29/6/93
Hora	5:45 p.m.
Firma	<i>[Signature]</i>

texto correcto

INTRODUCCION

Vuestra Comisión Especial Investigadora de la desaparición de un catedrático y nueve estudiantes de la UNE "Enrique Guzmán y Valle" - La Cantuta-, desde el inicio de sus funciones ha procurado cumplir en todo momento con el mayor celo posible, el noble encargo que se le ha conferido. Estamos plenamente inbuídos del carácter sumamente delicado y trascendente de dicho encargo, por la importancia que tiene para nuestro país el correcto y oportuno tratamiento de estos casos.

En tal virtud, prácticamente hemos agotado la captación directa de las pruebas y elementos de juicio a los que hemos tenido acceso. Es de lamentar que hayamos tenido que recortar nuestra acción en razón del Acuerdo adoptado por mayoría en el pleno del Congreso, que dada la prolongada situación de emergencia que atraviesa el país, exclusivamente podríamos recibir el testimonio de los principales jefes de la Fuerzas Armadas y de las entidades representadas en el Consejo de Defensa Nacional, Acuerdo que guarda similitud con lo dispuesto, sobre el particular, por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Para el desarrollo de la labor que hemos llevado a cabo, nuestra Comisión ha tenido en cuenta en todo momento que es necesario que el Estado y todas sus Instituciones y dependencias, contribuyan a crear y fortalecer las mejores condiciones de vida y de seguridad para la población en general, llevando adelante, con la mayor firmeza, acierto y cuidado posibles, todas las acciones que sean necesarias para combatir la violencia y lograr la pacificación, superando en esta forma, definitivamente, el luto y dolor que han venido agobiando al pueblo peruano, durante, 13 largos años. Años en que, al calor de ideas y prácticas fraticidas, se ha sumido a la población peruana en la miseria, la desesperanza y en una insulsa lucha intestina, que felizmente en los últimos meses al parecer viene siendo eficazmente controlada y superada.

En tal sentido, vuestra Comisión considera que si bien cabe poner el mayor esmero posible en la lucha directa contra quienes preconizan y desarrollan la subversión violentista, al mismo tiempo corresponde afinar los mecanismos y las acciones que el Estado Peruano desarrolla para combatirla, haciendo posible la pacificación definitiva que todos anhelamos.



6

Es por ello que nuestra Comisión ha llevado a cabo un exhaustivo ordenamiento y análisis de las referencias, datos, noticias y conceptos jurídicos que conciernen a los hechos que han sido materia de la investigación, para arribar de esta manera a las Conclusiones, Responsabilidades y Recomendaciones que juzgamos más atinadas al respecto y que ahora elevamos a consideración del pleno.

Teniendo en cuenta que dichos hechos se relacionan con el accionar de las Fuerzas Armadas, en este caso, del Ejército Peruano, en cuyo interior se ha advertido con mucha claridad, en cuanto a los hechos investigados, la presencia y proceder delictivos de algunos elementos y determinados jefes y oficiales, nuestra Comisión piensa que necesariamente tienen que ser investigados y ejemplarmente sancionados, de comprobarse su culpabilidad, tanto para prevenir que hechos similares se repitan en el futuro, como para fortalecer las garantías más esenciales de los derechos Humanos, que son base inconmovible del sistema democrático. Todo lo cual no significa de forma alguna agraviar a las Fuerzas Armadas, las cuales están por encima de lo ocurrido ya que esto último sólo compromete a algunos de sus elementos internos y en ningún caso a su majestad institucional.

Salvo mejor parecer.

Lima, 24 de Junio de 1993.



COMISION INVESTIGADORA SOBRE LA DESAPARICION DE NUEVE ESTUDIANTES Y UN PROFESOR DE LA UNE.

Indice.

Introducción

I. Cuestiones Preliminares.

- 1.1. Extremos del mandato de la Comisión.
- 1.2. Marco legal de esta investigación.
- 1.3. Recuento de actividades de esta Comisión.

II. Sobre los asuntos materia de averiguación.

- 2.1. Hechos denunciados.
- 2.2. Investigaciones practicadas por otras instituciones sobre estos hechos.
 - 2.2.1. Habeas corpus interpuestos.
 - 2.2.2. Investigaciones del Ministerio Público.
 - 2.2.3. Investigaciones practicadas en sede militar.

III. Sobre las cuestiones jurídicas planteadas por estos hechos.

- 3.1. Contenido de la figura criminal "desaparición forzada de personas".
- 3.2. Sobre las responsabilidades criminales derivadas de una desaparición forzada de personas.

IV. Sobre los hechos.

- 4.1. Antecedentes.
- 4.2. La incursión en el Pabellón de Varones.
- 4.3. La incursión en el Pabellón de Mujeres.
- 4.4. La incursión en la casa del Profesor Hugo Muñoz Sánchez.
- 4.5. Hechos posteriores.

V. Conclusiones.

VI. Responsabilidades.

VII. Recomendaciones.

1



I. CUESTIONES PRELIMINARES.

(A)

1.1. Extremos del mandato de la Comisión.

1. Con fecha 30 de marzo de 1993, los Congresistas de la República, Carlos Cuaresma Sánchez y Fernando Olivera Vega, presentan al Pleno del Congreso Constituyente Democrático, una Moción de Orden del Día, con el fin de establecer las circunstancias que provocaron la desaparición de los ciudadanos:

- Hugo Muñóz Sánchez
- Bertila Lozano Torres
- Dora Oyague Fierro
- Robert Teodoro Espinoza
- Marcelino Rosales Cárdenas
- Juan Mariños Figueroa
- Felipe Flores Chipana
- Luis Enrique Ortiz Perea
- Armando Amaro Cóndor y
- Heráclides Pablo Meza.

Hecho ocurrido el 18 de julio de 1992, en el Campus de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", ubicada en la zona denominada La Cantuta, del Distrito limeño de Lurigancho.

2. En sesión del Congreso Constituyente Democrático del 2 de abril de 1993 se aprobó la Moción antes glosada, acordándose designar una Comisión Investigadora integrada por cinco Congresistas:

- Roger Cáceres Velásquez, Presidente
- Gilberto Siura Cáspedes,
- Gloria Helfer Palacios,
- Carlos Cuaresma Sánchez y
- Jaime Freundt-Thurne Oyanguren.

En esa misma sesión se parte del análisis de la hipótesis contenida en la Moción, cuya demostración o descarte es objeto de esta investigación. Según ella, la desaparición de

estos ciudadanos habría podido producirse durante la ejecución de un operativo efectuado por elementos al parecer castrenses, realizado en la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", a horas 1.30am. el día 18 de julio de 1992.



5

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

A partir del texto de la Moción en cuestión, resulta que la hipótesis propuesta se justifica en cuatro cuestiones iniciales:

- Hugo Muñoz Sánchez era profesor de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" y los otros nueve ciudadanos son alumnos de la misma Casa de Estudios. Antonia Pérez Velásquez, esposa de Hugo Muñoz Sánchez y los profesores Octavio Martel y su esposa Luz María de Paz Sepúlveda, todos tenían como domicilio las residencias que administra la Oficina de Bienestar Social de la Universidad;
 - El local de La Cantuta, de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, se encuentra desde mayo de 1991, bajo custodia de un destacamento militar acantonado dentro del Campus Universitario.
 - El Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Nicolás de Bari Hernández Ríos, ante requerimiento del 14 Juzgado Penal de Lima, declaró tener conocimiento que el día 18 de julio del año pasado un grupo de efectivos del Ejército incursionó en la residencia estudiantil de la referida Universidad.
3. Corresponde a esta investigación analizar la posibilidad de comprobar la veracidad de la hipótesis contenida en la Moción del 2 de abril de 1993, partiendo de los supuestos que la justifican, y extraer de sus Conclusiones las Recomendaciones que sea pertinente plantear al Pleno a fin de proponer medidas adecuadas a la gravedad de los hechos investigados.

1.2. Marco legal de esta investigación.

4. El marco legal que define las atribuciones de una Comisión de Investigación como la presente está contenido en el artículo 35 del Reglamento del Congreso Constituyente Democrático. Dice su texto:

"Independientemente de la Comisión Permanente de Fiscalización, el Pleno puede nombrar Comisiones Investigadoras para asuntos de importancia que, en tal caso, no son tratados por dicha Comisión Permanente. Las Comisiones Especiales de Investigación están integradas por tres a cinco congresistas. Se instalan dentro de los tres días siguientes a su designación. Presentan su informe al



Pleno dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su instalación, salvo que se les conceda un plazo mayor.

Durante su funcionamiento, cada Comisión Investigadora mantiene informada de sus avances a la Comisión Permanente de Fiscalización. Las Conclusiones aprobadas por el Pleno no obligan al Poder Judicial, salvo en el antejuicio constitucional, ni afectan el curso de los procesos judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Público para los fines pertinentes.

Las Comisiones de Investigación pueden requerir la comparecencia de cualquier ciudadano, bajo los mismos apremios que se observan en los procesos judiciales.

Las Comisiones de Investigación pueden solicitar al Presidente del Congreso o a su Consejo Directivo, la contratación de servicios profesionales de asesores competentes en el asunto materia de investigación".

5. Del texto citado se desprende que las Comisiones de Investigación son órganos que inscriben sus actividades dentro del marco global definido por las funciones de fiscalización del Congreso. Según la moderna teoría administrativa, las funciones de fiscalización del Poder Legislativo definen sus atribuciones de control sobre la actividad pública desarrollada por los otros Poderes del Estado y por las personas jurídicas de derecho público. Respetando los principios de independencia de la función judicial y de no avocamiento de causas pendientes, las Comisiones Investigadoras tiene competencia para interesarse por todo asunto que exprese tendencias generales en la actuación de los organismos que conforman el sector público, sea que se expresen en un caso concreto o en una tendencia o práctica generalizada.
6. Según el texto del Reglamento, los informes de las Comisiones Investigadoras deben contener Conclusiones sobre hechos. Aunque no lo diga expresamente, el texto bajo comentario, dada la importancia de los asuntos investigados y la necesaria celeridad de los plazos concedidos, resulta imprescindible que los informes de estas Comisiones vayan acompañados de Recomendaciones en que se detallen todas las posibles medidas y acciones que corresponda adoptar al Congreso y a las otras instituciones del Estado con ocasión de los hechos materia de la investigación, previendo la ocurrencia en el futuro de otros análogos.



(7)

1.3. Recuento de actividades de esta Comisión.

7. Con fecha 08 de abril, se llevó a cabo la instalación de la Comisión, habiéndose acordado por unanimidad designar como su Presidente al Congresista Dr. Róger Cáceres Velásquez.

En distintas fechas, la Comisión procedió a recibir los testimonios de nueve alumnos internos de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" (en adelante UNE); con fecha 23 de abril de la vecina del profesor, señora Luz María de Paz Sepúlveda; con fecha 20 de Mayo de la docente y esposa del profesor desaparecido, señora Antonia Pérez Velásquez; con fecha 09 de junio del personal administrativo, profesor Juan Silva Aguilar, Director de la Oficina Central de Bienestar Universitario y, con fecha 14 de Junio del señor Jaime Oyague Velazco, tío de la alumna desaparecida, Dora Fierro Oyague.

Con fecha 14 de abril, la Comisión recibió la declaración del señor Alfonso Ramos Geldres, Rector de la UNE y del señor Rafael Laynes Bastante, Profesor Decano que se encontraba encargado del Rectorado al momento en que se produjeron los hechos, cuyas declaraciones se advirtió eran coincidentes con las de otros testigos, en el sentido de que la UNE atravesaba desde tiempo atrás por delicados conflictos internos, aún no superados.

Con fecha 17 de abril, la Comisión llevó a cabo una Inspección Ocular minuciosa en el Campus Universitario, visitando en especial los dormitorios de los alumnos varones y mujeres y la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez. En esa ocasión se dialogó también ampliamente con los alumnos, docentes, administrativos y trabajadores residentes, así como, con los familiares de otras personas que posteriormente fueron detenidas por otras ocurrencias. Durante la Inspección Ocular se comprobó la presencia de la Base Militar y también el control que ésta ejercía sobre el entorno y especialmente sobre el ingreso y salida del Campus Universitario.

El 20 de abril, la Comisión recibió la declaración del General de División EP Nicolás De Bari Hermoza Ríos, Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada del Perú, quien sustancialmente afirmó que el Ejército como Institución no había tenido participación en los hechos materia de la investigación; alcanzando a la Presidencia de la Comisión copia de las dos denuncias que había formulado el 15 de abril ante el Fuero Privativo Militar, según se detalla más adelante.



8

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

Con fecha 27 de abril, concurrió a declarar el Congresista Henry Pease García, quien manifestó que todo lo que sabe ya lo había expresado el 08 de abril.

El 28 de abril, se constituyó a la Comisión, el General PNP Carlos Domínguez Solís, actual Jefe de la DINCOTE, y con fecha 20 de mayo, hizo lo propio el Teniente General PNP Antonio Ketín Vidal Herrera, quien fuera Jefe de la DINCOTE, en la época en que se produjeron los hechos. Ambos coincidieron en afirmar que la DINCOTE no había llevado a cabo ninguna investigación al respecto, en razón de tratarse de personas desaparecidas, lo que corresponde conocer a la División respectiva, y por cuanto además los hechos habían ocurrido dentro de un local bajo control militar.

Con fecha 17 de mayo, la Comisión en pleno viajó a Buenos Aires (Argentina), donde se entrevistó con fecha 18 de Mayo con el General de División EP (r) Rodolfo Robles Espinoza, el cual se ratificó en su denuncia pública efectuada el 05 de mayo, precisando que el Ejército como Institución no era responsable de los hechos. No entregó pruebas materiales, pero señaló dónde podían pedirse algunas; no aportando tampoco nombres de probables testigos, por no colocarlos en situación de riesgo.

Con fecha 20 de mayo, la Comisión en pleno se entrevistó con el Almirante AP Roberto Duboc Deza, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, y el señor Auditor, General de Brigada EP Guido Guevara Guerra, quienes expresaron las razones por las cuales sostenían que no era posible que la Investigación Parlamentaria abarcara testigos y pruebas conformantes de la investigación privativa. Por su parte, la Comisión en mayoría, consideró que era su potestad constitucional entrevistarse con los testigos y recabar las pruebas necesarias.

Con fecha 24 de mayo, el Pleno del Congreso Constituyente Democrático, acordó prorrogar en veinte días el plazo que le fuera concedido a la Comisión, para que pudiera concluir la investigación encomendada.

Con fecha 1 de junio, la Comisión recibió las declaraciones del Jefe del Sistema de Inteligencias Nacional (SINA) y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), General de División EP Julio Rolando Salazar Monroe, quien manifestó que el Sistema no había conocido nada sobre los hechos por estar encargado exclusivamente de Inteligencia a nivel nacional.

Con fecha 08 de junio, la Comisión recibe nuevamente al General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien se ratifica en primera declaración, manifestando ante las hipótesis planteadas por el Presidente de la Comisión, que los

su



miembros de ésta "con su imaginación" podían formular las que quisieran, pero que él no podía pronunciarse por ninguna, por estarle prohibido en razón de la investigación privativa en curso.

La Asesoría de la Comisión llevó a cabo el estudio de las dos acciones de Habeas Corpus, y la denuncia presentada ante el Ministerio Público, sobre los hechos. Asimismo, la Asesoría al constituirse en el Fuero Privativo Militar, pese a las gestiones hechas por el Presidente de la Comisión, no recibió información alguna al respecto, por hallarse en curso la investigación privativa.

La Comisión Investigadora, durante el tiempo que desarrolló las investigaciones, realizó veintitrés sesiones.

8. En segundo lugar esta Comisión, a fin de redactar el presente informe, se ha basado en documentos proporcionados por personas y entidades diversas, entre ellos:

- Denuncia ante el CCD hecha por los familiares de los estudiantes y profesor de la UNE el 26 de febrero de 1993;
- Acta de la visita realizada por la Comisión a la UNE el sábado 17 de abril de 1993;
- Oficio No 020-93 CGE del 5 de mayo de 1993 del Gral. Nicolás de Bari, poniendo en conocimiento de la Comisión el contenido de la Resolución del Consejo de Guerra que prohibió la presentación ante la Comisión de los oficiales requeridos;
- Denuncia del Gral. Rodolfo Robles E., presentada el 5 de mayo de 1993;
- Acta de exhorto sobre absolución de posiciones del Gral. Rodolfo Robles E. del 24 de mayo de 1993;
- Moción sustitutoria del 24 de mayo de 1993 por la que el Congreso Constituyente Democrático autoriza a los oficiales citados por Comisiones a ser representados por sus respectivos Comandantes Generales, del Director General de la PNP y de los demás Jefes de los Organismos del Sistema de Defensa Nacional;
- Oficio No 705 VICSM del 09 de junio de 1993, por el que el Vocal Instructor del CSJM alcanza al Gral. de División Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional la Resolución que declara improcedente la autorización



10

COMANDO EN JEFE FUERZO ARMADO DE CHILE

solicitada por el ex-Capitán Vladimiro Montesinos para concurrir a prestar declaración ante esta Comisión;

- Oficio No 1361-93 MP-FN del 23 de abril de 1993 enviado por la Fiscal de la Nación a la Comisión sobre los avances de las investigaciones efectuadas por la Octava Fiscalía Provincial a cargo del Dr. Gustavo Efraín Quiroz Vallejos;
- Oficio No 468 VICSJM del 29 de abril de 1993 por el que el Fuero Privativo Militar comunica a la Comisión el inicio de dos procesos vinculados a los hechos investigados.



II. SOBRE LOS ASUNTOS MATERIA DE AVERIGUACIÓN.

2.1. Sobre los hechos denunciados.

9. Según los recursos de Habeas Corpus tramitados en Lima ante los Juzgados Penales 119 y 149 ¹, en la madrugada del 18 de julio de 1992, un grupo de aproximadamente 20 individuos armados, algunos vestidos con botas negras, pantalón de buzo, con pasamontañas, chompas negras de manga larga con cuello tipo tortuga y otros vestidos de civil, habrían incursionado en la UNE arrestando a un profesor y diez alumnos que residían en las viviendas de su Campus Universitario. Según los testigos, los detenidos, luego de ser identificados, fueron introducidos en vehículos de uso de los responsables y conducidos con destino desconocido. Todos ellos permanecen desaparecidos hasta el momento.
10. La relación de las víctimas es la siguiente: profesor Hugo Muñoz Sánchez (47 años), alumnas Bertila Lozano Torres (de la Facultad de Humanidades, 21 años) y Dora Oyague Fierro (Facultad de Educación Especial, 21 años) y los alumnos Robert Teodoro Espinoza (Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 23 años); Marcelino Rosales Cárdenas (Facultad de Humanidades y Artes, 22 años), Juan Mariños Figueroa (Facultad de Electrónica, 29 años), Felipe Flores Chipana (Facultad de Electrónica, 23 años), Luis Enrique Ortiz Perea (Facultad de Cultura Física y Deportes, 20 años), Armando Amaro Cóndor (21 años, Facultad de Electrónica) y Heráclides Pablo Meza (Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 29 años).
11. El viernes 2 de abril de 1993 el Congresista Henry Pease García recibió, en un sobre cerrado, un documento anónimo en el que se describe en forma detallada una secuencia de hechos que podrían corresponder a la forma en que se perpetraron las desapariciones del 18 de julio ². Según ese documento, el asesor y funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional, abogado Vladimiro Montesinos Torres, habría tomado parte en la realización de los hechos y habría coordinado

¹ Escritos presentados, respectivamente, los días 24 de julio y 21 de agosto de 1992.

² La Comisión debe anotar que el General Hermoza Ríos, Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha calificado el documento en referencia como apócrifo y falso.



12

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

con los Generales EP Juan Rivero Lazo, Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército Peruano, y Luis Pérez Documet, Jefe de la División de Fuerzas Especiales, la ejecución del operativo, denominado "Secuestro". El Comandante General del Ejército, General Nicolás de Bari Hermoza Ríos habría aprobado la ejecución de ese plan. El 17 de julio de 1992, a las 20:00 horas, se habría presentado en la UNE el Mayor EP Berteti Carazas, del BIP 39, para hacer las coordinaciones del caso con el Teniente Jefe de la Base de Acción Cívica instalada en la Universidad. Aproximadamente a las 24:00 habrían llegado a la UNE el Comandante Guzmán Calderón y el Mayor Martín Rivas, cada uno al mando de sus respectivas unidades.

12. Según el mismo documento en referencia, el Comandante EP Manuel Guzmán Calderón habría realizado el arresto de 11 detenidos y los habría entregado al Mayor EP Martín Rivas, quien los habría subido a vehículos del SIE y de la DINTE, retirándose del lugar a las 04:15 horas del día 18. El Mayor EP Martín Rivas y su equipo, con los detenidos, habría tomado la Carretera Central con destino a Lima, ordenando la ejecución de las víctimas a mitad de camino. A las 10:00 horas del 18 de julio el mismo Mayor EP Martín Rivas habría dado cuenta de lo ocurrido al Coronel EP Federico Navarro Pérez, quien habría informado al General EP Juan Rivero Lazo. Este último habría informado de los hechos al General de Bari Hermoza Ríos, quien habría increpado lo sucedido al General Rivero. Esa misma noche se habría ordenado el traslado de los cadáveres.

Según algunas versiones periodísticas, los desaparecidos habrían sido llevados a algún establecimiento oficial, mencionando al Cuartel General del Ejército ("el Pentagonito"), la Escuela de Comandos del Ejército, el Servicio de Inteligencia del Ejército, como los lugares donde habrían sido torturados, antes de que se les diera muerte.

13. El 7 de mayo de 1993 el General de División EP Rodolfo Robles Espinoza, presentó ante la opinión pública una declaración (ratificada ante esta Comisión, en Buenos Aires) en la que reconoció bajo juramento verosímiles los extremos que aparecen en el documento alcanzado al congresista Henry Pease García el 2 de abril.



13

2.2. Investigaciones practicadas por otras instituciones sobre e s t o s h e c h o s

2.2.1. Habeas Corpus interpuestos.

14. Conforme a lo anotado, a consecuencia de los hechos materia de esta investigación se presentaron, en Lima, dos peticiones de Habeas Corpus, ante los Juzgados Penales 119 y 149.
15. Antonia Pérez Velásquez, Mercedes Guispe Marcatinco y Luz María de Paz Sepúlveda de Mejía, declararon como testigos ante el 149 Juzgado Penal. En sus testimoniales, estas personas coincidieron en señalar que el día de los hechos un grupo de individuos, probablemente efectivos de las fuerzas de seguridad, ingresaron a las viviendas de la UNE, llevándose detenidos al profesor Hugo Muñoz Sánchez y a diez estudiantes. La identificación de los autores de la agresión se hizo en términos de "clase" (efectivos de las fuerzas de seguridad), no en términos individuales "ya que los mismos tenían cubiertos los rostros con pasamontañas" (texto de la sentencia del 149 Juzgado).
16. En un primer momento del proceso seguido ante el 149 Juzgado Penal, los Generales del Ejército Peruano declarantes sostuvieron que las fuerzas de seguridad no realizaron ningún operativo en la UNE el día de los hechos, "por lo cual no se puede haber detenido a ningún estudiante y mucho menos a un profesor" (Oficio 1149 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al 11 Juzgado Penal), negándose a la identificación y presentación del personal destacado a la Base Militar acantonada en la Universidad desde el 21 mayo de 1992 "por tratarse de personal que rota constantemente" (declaración del Presidente del Comando Conjunto al Juez del 149 JPL).
17. El primer proceso concluyó declarando improcedente la petición: "no habiéndose establecido en modo alguno la imputación formulada contra los accionados" (435-92 Sta. SPL). El segundo (tramitado ante el 149 Juzgado Penal de Lima) tuvo una primera sentencia en que se declaró infundada la petición contra el Presidente del Comando Conjunto y otras autoridades del Gobierno, pero fundada "contra los que resulten responsables". Según este texto "ha quedado establecida la existencia de indicios razonables tendientes a acreditar que los ciudadanos perjudicados efectivamente han sido víctimas de detención arbitraria, no habiéndose,



sin embargo podido establecer, a lo largo de la presente investigación, la identidad de sus agresores, debiendo, por lo tanto, continuar con las investigaciones los Representantes del Ministerio Público [...] Por otro lado no se ha acreditado que los Señores Generales emplazados hayan dictado orden alguna para que los efectivos militares a su mando detuvieran a civil alguno".

18. La sentencia en mención fue declarada nula por la Sexta Sala Penal, que ordenó al Juzgado ampliar las investigaciones y rechazó el argumento por el que las Fuerzas Armadas pretendían eludir su deber de poner a disposición de la Justicia al personal asignado al campamento ubicado en la Universidad el día de los hechos (Resolución de la VI Sala Penal, del 13 de octubre de 1992) ³. En esta ampliación el Presidente del Comando Conjunto, General EP Nicolás De Bari Hermoza reconoció, en una nueva declaración prestada ante el 14º Juzgado, que el día de los hechos se había desarrollado una acción regular en la Universidad a cargo del Jefe de la Segunda Región Militar, General EP Luis Salazar Monroe, quien luego de la intervención emitió un reporte al Comando Conjunto. Aseguró que no hubo detenidos y volvió a sostener que no podía identificar ni presentar al personal destacado por su permanente movilidad y "por razones de seguridad".

³ Según su texto: "no existe justificación para que [el Comando Conjunto] se niegue a ello, pues esos derechos se encuentran suspendidos como las garantías consagradas en la Constitución. No es aplicable puesto que no se trata de simples violaciones domiciliarias, sino de la desaparición de 10 personas [...] los estados de emergencias y el régimen de excepción no suspenden ni pueden suspender las investigaciones"



15

2.2.2. Investigaciones del Ministerio Público *.

19. La Fiscalía de la Nación tomó conocimiento sobre los hechos por las notas de prensa publicadas los días 4 y 5 de agosto de 1992 por los diarios "La República" y "El Nacional". A solicitud de la Fiscal de la Nación, el día 6 de agosto de 1992, el Fiscal Gustavo Quiroz Vallejos, titular de la 8va. Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, informó que si bien su despacho no había recibido denuncia alguna por las mencionadas desapariciones, había oficiado a la Fiscalía que estaba de turno al momento de las publicaciones, para que le informara sobre las acciones tomadas con ocasión de las notas de prensa. El Dr. Quiroz Vallejos informó además haber buscado a los supuestos desaparecidos en las dependencias de la Dirección contra el Terrorismo y en las de la Dirección de Seguridad del Estado, con resultado negativo. Finalmente, la 8va. Fiscalía había oficiado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y a la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, solicitando información sobre los hechos *.
20. El 23 noviembre de 1992, la Fiscalía de la Nación recibió una denuncia suscrita por Jaime Oyague Velazco, quien pedía su intervención para esclarecer la desaparición de su sobrina, víctima de los sucesos de 18 de julio. El 8 de enero de 1993 la Fiscalía de la Nación remitió copia de esa denuncia al Ministro de Defensa * y a la 8va. Fiscalía *. A esta última la requería, además, para que informe sobre los avances de las investigaciones realizadas.

* En este apartado el informe se remite, principalmente, al Oficio 1244-MP-FN del 14 de Abril de 1993 y a su documentación sustentatoria. El Oficio en cuestión fue dirigido por la Fiscal de la Nación, Doctora Blanca Nélida Colán a Roger Cáceres Velásquez, Presidente de la Comisión de DDHH y Pacificación del CCD para los fines de esta investigación.

• Oficio 494-92-MP-8a.FPPL.

• Oficio 029-93-MP-FN.

• Oficio 030-93-M-SEGFIN.



(16)

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

21. El 13 de enero de 1993 el titular de la Bva. Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima informó a la Fiscal de la Nación que las indagaciones practicadas ante la DINCOTE, ante Seguridad del Estado y ante la División de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, habían arrojado un resultado negativo. Informó también que ni el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ni el Ministro de Defensa habían respondido a los requerimientos del Ministerio Público.
22. Según esa misma comunicación la Bva. Fiscalía solicitó, los días 3 y 26 de agosto de 1992, a la II Región Militar la lista del personal de servicio en la UNE, el día de los hechos. El 2 de setiembre de ese mismo año la Fiscalía a cargo de la investigación recibió el Oficio 060/SRM/K-6 DDHH, en el que se informa que el personal militar bajo el Comando de la Ila. Región Militar "ni ha detenido ni capturado a persona alguna en la referida Universidad" y que no era "aún posible" proporcionar la relación del personal de servicio en la fecha y lugar mencionados por encontrarse el mismo en "permanente rotación".
23. El 21 de agosto de 1992 la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Defensa de los Derechos Humanos informó a la Fiscalía de la Nación haberse constituido en la persona de su titular, al "Fuerte Rimac" en la 18a. División Blindada, al Centro de Instrucción de la Policía Nacional del Perú, al Cuartel General del Ejército, a las dependencias de la Dirección Contra el Terrorismo y a las dependencias de Seguridad del Estado, con resultado negativo.
24. El 17 de noviembre de 1992 la Fiscalía reiteró su requerimiento a la Ila. Región Militar, sin respuesta hasta el momento.
25. En el curso de esta investigación se han recibido las declaraciones de Andrea Gisela Ortiz Perea (hermana de Luis Enrique Ortiz Perea); Alfonso Ramos Geldres (Rector de la Universidad); Rosario Muñoz Sánchez de Pantoja (hermana del profesor); Antonia Pérez de Muñoz (esposa del profesor) y Octavio Mejía Martell (docente testigo del secuestro). Todos ellos coincidieron en señalar que fueron militares los que intervinieron en los hechos, señalando la primera y la

• Oficio 004-93-8a.FPPL.

• Oficio 488-92-MP-FN FEDPDH-D.



13

tercera que en ellos habrían participado los oficiales Luis Barboza y Julio César Estrada así como un soldado de nombre "Enrique".

26. El 8 de enero de 1993 la Fiscalía a cargo dispuso reiterar comunicación a la II Región Militar, requiriendo información bajo apercibimiento de denunciarse penalmente a los responsables de una nueva omisión.
27. Las conclusiones provisionales de estas investigaciones se presentan en el Oficio 004-93-8a.FPPL dirigido por el titular de la Bva. Fiscalía a la Fiscal de la Nación. Según su texto, "es evidente que en los altos mandos del Ejército Peruano ocultan la información del personal que estuvo de servicio en la Universidad La Cantuta en la fecha en que ocurrieron los hechos, por lo que sería pertinente se sirva cursar los oficios pertinentes tanto al Ministro de Defensa, como al Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Ila. Región Militar del Ejército Peruano para que informen sobre los presentes hechos".
28. El 15 de enero de 1993 la Fiscalía de la Nación recibió el Oficio 266-SGMD-M firmado por el General de Brigada Tomás Caveró Vicentelo, Secretario General Accidental del Ministerio de Defensa. Según este texto, "el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de concluir las investigaciones informó que los mencionados ciudadanos no han sido detenidos ni capturados bajo ninguna circunstancia por parte de los efectivos militares". Por su parte, la DIRIGEN PNP con Oficio 128-92-DGPNP-CEOPOL manifiesta que, tanto la VIIa. Región de la PNP como los Jefes de Inteligencia y Contra el Terrorismo, han informado que el 18 de julio de 1992 no se llevó a cabo ninguna operación policial en la Universidad La Cantuta. En opinión del General Caveró Vicentelo, "por lo anteriormente expuesto han quedado desvirtuadas las denuncias formuladas contra las Fuerzas del Orden por presuntas violaciones de DDHH en agravio de los estudiantes y un profesor integrantes de la mencionada universidad".
29. El 26 febrero de 1993 la Fiscal de la Nación cursó un nuevo oficio al Ministro Briones Dávila para que informara acerca de los presuntos desaparecidos. Hasta el momento este oficio no ha sido respondido.
30. El 3 de marzo de 1993 la Fiscal de la Nación recibió un Oficio de la 14a. FPPL informando que sus investigaciones en



(B)

la DINCOTE sobre este caso habían arrojado resultado negativo. El 9 de marzo el Fiscal Especial de Defensoría del Pueblo y Defensa de los Derechos Humanos informó a la Fiscal de la Nación que las visitas realizadas por él a las dependencias de Seguridad del Estado, de la DINCOTE, de la 18a. División Blindada y del Centro de Instrucción de la Policía Nacional del Perú tuvieron resultados negativos.

31. El 16 de marzo de 1993 la Fiscalía de la Nación recibió el Oficio 48-93-21a.FPPL de la 21 Fiscalía, al que se acompaña el Oficio 2963-DINCOTE del 9 de Marzo en el que se informa que Robert Teodoro Espinoza, Armando Amaro Córdor y Felipe Flores Chipana fueron ingresados como detenidos el 22 de mayo de 1991 procedentes de la Estación de Policía Técnica de Chosica y puestos a disposición de DIRSEG el 4 de octubre de 1991; y que Marcelino Rosales Cárdenas figura como detenido el 11 de octubre de 1991 por DIRCOTE y ha sido puesto en libertad el día 14.
32. El 16 de marzo de 1993 la Bva. Fiscalía Provincial informó a la Fiscalía de la Nación ¹⁰ haber recibido el Oficio 054-CP-JAPE del 25 de febrero de 1993, según el cual "Luis Barboza" y "Julio César Estrada" no se encuentran registrados en el Ejército. En ese mismo oficio se informa que la Bva. Fiscalía ha oficiado al Comandante General del Ejército Peruano para que remitan informe especificando nombre exacto del Teniente EP de apellido Medina, que habría estado de servicio el día de los hechos en la Base Militar acantonada en la UNE, no habiendo obtenido respuesta.
33. El 13 de abril el titular de la Bva. Fiscalía ¹¹ informó a la Fiscal de la Nación haber reiterado oficio a la II Región Militar el día 7 de marzo, insistiendo en solicitar la relación del personal que estuvo de servicio el 17 y 18 de julio de 1992 en la UNE. En ese oficio el Fiscal habría indicado expresamente que "no es atendible lo respondido en el Oficio 060/SRM/K-6/DDHM de que aún no era posible proporcionar tal información en vista de que el personal que cubre dicho servicio se encuentra en permanente rotación; pues se considera que todos los Institutos Armados deben llevar un control permanente de su personal, lugar y función que estos realizan".

¹⁰ Oficio 494-92-MP-8a.FPPL.

¹¹ Oficio 043-93-8o.FPPL.



19

34. En ese mismo oficio el titular de la Bva. Fiscalía Provincial puso en conocimiento del Fiscal de la Nación que, "al no haber cumplido la IIa. Región Militar con proporcionar la relación del personal que se encontraba de servicio en la Universidad los días 17 y 18 de julio a pesar de haberse reiterado oficios y dictarse el apercibimiento de denunciarse penalmente a los que resulten responsables de la no información, no se ha recepcionado la indicada relación, motivo por el cual este despacho dispuso con fecha 21 de enero de 1993, remitir copias a la Fiscalía de Turno -37a. FPPL-mediante Oficio 494-92-8a.FPPL para que ejecute la acción penal correspondiente".
35. Hasta la fecha, ninguna de las dependencias del Ministerio Público ha cumplido con hacer efectivo el apercibimiento decretado el 8 de enero de 1993, que debería haber dado lugar a una denuncia ante el Poder Judicial por resistencia a la autoridad, susceptible de ser ampliada por complicidad en el delito de desaparición forzada de personas, siempre que se demuestre que la omisión de informar tiene por finalidad favorecer intencionalmente la impunidad de que gozarían los autores del crimen investigado.

2.2.3. Investigaciones realizadas por el Fuero Privativo Militar.

36. El 15 de abril de 1993 el Comandante General de Ejército presentó ante la Sala de Guerra del Consejo Superior de Justicia Militar dos denuncias que dieron lugar al inicio de dos procesos paralelos que fueron iniciados el día 16. El primero se sigue "contra el personal del Ejército Peruano que resulte responsable de los delitos de insulto al superior, contra la administración de justicia, desobediencia y negligencia como consecuencia de la divulgación de un documento apócrifo que lleva como pie de imprenta el logo "COMACA" y tiene como título "Captura y ejecución extrajudicial de un profesor y diez alumnos de la UNE-La Cantuta"; y el otro se sigue "contra el personal del Ejército Peruano que resulte responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra la vida el cuerpo y la salud en agravio de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" -La Cantuta-¹².

¹² Oficio 278-SG-CSJM del 16 de abril de 1993 al Comandante General del Ejército Peruano.



20

37. Las autoridades del Fuero Privativo Militar han negado a esta Comisión todo acceso a la documentación reunida durante la tramitación de estos expedientes. Sin embargo, a consecuencia de los requerimientos efectuados por esta Comisión para que se presente ante ella el personal del Ejército Peruano y del Servicio de Inteligencia Nacional presuntamente involucrado, se ha tenido conocimiento de dos resoluciones dictadas por las autoridades del Fuero Privativo Militar que revisten particular importancia.
38. La primera de estas Resoluciones se origina en el Oficio N° 021-93 CEIU-CCD del 27 de abril, cursado por esta Comisión al Comando Conjunto para solicitar la concurrencia de un grupo de oficiales del Ejército Peruano que parecerían estar involucradas en los hechos investigados. Según el oficio N° 020-93-CGE del 05 de mayo de 1993, recibido el requerimiento, el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas solicitó autorización de la Sala de Guerra, "con la finalidad de dar una respuesta adecuada" ¹³. El 30 de abril la Sala de Guerra resolvió "declarar improcedente la autorización solicitada [...] por cuanto los pedidos que formula la Comisión especial interfieren la jurisdicción penal militar". Según el oficio de respuesta a esta Comisión "dentro del propósito de colaborar con la comisión, el Comandante General ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de la Sala de Guerra, a fin de lograr la revocatoria en la instancia superior correspondiente", cuestión que, en la versión del emplazado, impediría al Comando Conjunto cumplir con el requerimiento efectuado por la Comisión.
39. La Segunda Resolución fue adoptada a consecuencia del Oficio 058-93-CEIUC/CCD del 9 de junio de 1993, por medio del cual la Comisión solicitaba la comparecencia del abogado Vladimiro Montesinos a fin de recabar su declaración sobre los hechos investigados. Recibida esta citación, el abogado Montesinos solicitó autorización a la Sala de Guerra, que resolvió, el nueve de junio de 1993, declarar improcedente la petición; y, en consecuencia, prohibir la concurrencia del emplazado. En sus consideraciones, señala esta resolución, "que el citado Oficial se encuentra a disposición de la Justicia Militar a partir del siete de mayo de mil novecientos noventa y tres, donde ha prestado su declaración con fecha veintiuno del mismo mes y año; Que, al existir un proceso penal en trámite ante este Órgano Jurisdiccional Militar [...] el requerimiento formulado por

¹³ Oficio N° 019-93-CGE del 02 de abril de 1993.



(2)

dicha Comisión [...] interfiere el ejercicio de la función jurisdiccional".

40. La Comisión expresa su extrañeza por el dictado de estas Resoluciones, que han sido adoptadas conforme a un procedimiento no previsto por ley alguna. En efecto, según el artículo 180 de la Constitución Política vigente, las Comisiones Investigadoras tienen atribución para requerir la comparecencia de cualquier persona "bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial". El texto Constitucional no provee ninguna excepción a esta regla. Tampoco el Código ni la Ley Orgánica de Justicia Militar establecen ningún trámite que condicione la concurrencia de las personas emplazadas a algún tipo de pronunciamiento de las autoridades de este Fuero. En consecuencia, debe concluirse que las resoluciones referidas han sido dictadas sin ninguna base legal, por lo que no pueden ser admitidas como justificación para no comparecer al requerimiento de esta Comisión.
41. Además, esta Comisión debe llamar la atención sobre una cuestión adicional: uno de los procesos militares iniciados comprende cargos por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Las figuras delictivas comprendidas dentro de esta denominación genérica están reguladas por el Código Penal Común, que sólo pueden ser aplicados en sede militar "cuando agraviado e inculcado son militares" (artículo 324 del Código de Justicia Militar). El Código vigente es expreso en señalar que, "Cuando se hubiese cometido un delito común y otro militar independientes entre sí, la jurisdicción ordinaria conocerá el primero y la militar el segundo". El Fuero Privativo Militar está, entonces, en la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación todo indicio que permita establecer responsabilidades criminales por delitos contra la vida, el cuerpo y salud cometidos contra civiles durante la realización de los hechos que se investiga. Por las mismas consideraciones, la norma de reserva sobre los procesos militares establecida en el artículo 433 del Código de Justicia Militar sólo puede ser aplicada en relación a los aspectos relativos a delitos militares conocidos durante la investigación de los hechos, no siendo admisible su aplicación para negar acceso a las instancias civiles sobre informaciones vinculadas a la comisión de delitos comunes.



III. SOBRE LAS CUESTIONES JURÍDICAS PLANTEADAS POR ESTOS HECHOS.

3.1. Contenido de la figura criminal "desaparición forzada de personas".

42. La Comisión debe evaluar los hechos investigados haciendo referencia a la figura de desaparición forzada de personas, crimen de lesa humanidad que en nuestro ordenamiento está previsto por el artículo 1 del Decreto Ley 25592. Según este texto, *"El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición debidamente comprobada, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 15 años e inhabilitación, conforme al Artículo 36 incisos 1 y 2 del Código Penal"*.
43. La desaparición forzada de personas es un crimen pluriofensivo, es decir, un crimen que afecta un conjunto de bienes jurídicos que corresponden a diversas atribuciones contempladas por el Derecho Internacional como "derechos humanos" respecto a los cuales el Estado tiene obligaciones de protección y garantía ¹⁴. La lesión perpetrada en este tipo de situaciones se plantea respecto de la persona humana, la cual es "fin supremo de la sociedad y del Estado" ¹⁵.
44. El Informe sobre la Violación a los Derechos Humanos del Servicio Paz y Justicia del Uruguay (1972-1985) define la desaparición forzada de personas como "una política en que el gobierno busca alcanzar la máxima capacidad represiva con el mínimo de responsabilidad". Continúa el texto precisando que "Al no ser reconocida la detención el prisionero está formalmente a merced de sus captores. En este sentido, la desaparición es una práctica al servicio de otras graves violaciones a los derechos humanos como la tortura y la ejecución extrajudicial [...] En definitiva, una desaparición es una situación incierta, un preso sin vista, ni tribunal, ni condena, defensa; un preso que nunca retorna. Eso es lo dramático, lo que la caracteriza como acto criminal, especialmente cruel" ("Uruguay, Nunca Más": 286).

¹⁴ Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de julio de 1989, en referencia al Caso Velaquez Rodríguez contra el Estado Hondureño.

¹⁵ Artículo 1 de la Constitución Política del Estado peruano.



45. En coincidencia con lo anotado, la profesora Mirta S. de Teitelbaum ha sostenido que: "En el contexto de los derechos humanos, el derecho a la personalidad jurídica (o derecho a ser reconocido como persona ante la ley) se refiere no sólo al ejercicio de ciertos derechos civiles [...] sino fundamentalmente a la posibilidad de usar las garantías y recursos que las leyes acuerdan a todas las personas para la protección de sus derechos humanos. Es precisamente la denegación del uso de esas garantías y recursos y la privación o exclusión de la persona de la red de los elementos legales, institucionales y sociales que la protegen, el primer elemento específico del tipo penal "desaparición forzada". Según las consideraciones precedentes, podría decirse que la desaparición forzada de personas es esencialmente una violación a los derechos de la libertad, la seguridad y la personalidad jurídica, pues constituye una privación ilegal de la libertad en la que se mantiene oculta a la víctima impidiéndosele toda forma de contacto, por medios regulares, con su entorno familiar, social, institucional y legal, de modo que no pueda ejercer ningún recurso legal ni recurrir a ningún medio de protección social, institucional o familiar". Concluye ella señalando que "el concepto incluye no sólo la privación de todo recurso legal, sino también la idea de aislamiento social e institucional" (Teitelbaum 1988:66).

46. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos "La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los estados partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de la libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez e interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto [...] Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Por lo demás, las investigaciones que se han verificado donde ha existido la práctica de desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado la libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación a su derecho a la integridad física [...] La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la



2A

impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida [...] La práctica de las desapariciones [...] implica el abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención (Americana)" (Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafos 155-158).

47. En términos penales, la desaparición forzada de personas hace referencia al proceso por el que se sustrae a una persona de toda forma de protección institucional. El arresto o secuestro de la víctima es el momento inicial de este proceso (inicio de ejecución) y el falseamiento o negación de su destino representa la consumación del crimen (inicio del llamado "estado consumativo"), pero ninguno de ellos absorbe la totalidad del delito contemplado en esta figura. La estructura del crimen parte de la constatación del hecho "desaparición forzada" para distribuir la responsabilidad penal entre todos los servidores o funcionarios públicos que hayan concurrido a la realización de los actos que la provocaron, sea que su concurso se haya producido a partir de una orden o de la ejecución de la misma.

3.2. Sobre las responsabilidades criminales derivadas de una desaparición forzada de personas.

48. El delito de desaparición forzada de personas es complejo. Para su adecuada investigación se requiere contar con una idea precisa de los modos en que se organiza la esfera de sujetos responsables (los llamados "autores") para estos casos.
49. En dogmática penal, "autor" es quien resulta penalmente responsable por una situación lesiva, calificada como delito. El criterio al que mayoritariamente se acude para establecer responsabilidades penales es el llamado "dominio del hecho": "El dominio del hecho lo tiene [...] quien] tiene el poder de decisión sobre la configuración central del hecho." (Zaffaroni, Eugenio Raúl. "Manual de Derecho Penal" p. 572. Lima, Ediciones Jurídicas 1986).
50. Como dice el profesor Muñoz Conde: "Este concepto [...] es el más apto para delimitar quién es autor y quién es partícipe [...] sólo quien tenga la última palabra y decida si el delito se comete o no, debe ser considerado autor. Con ayuda de este criterio podemos comprender mejor dos formas específicas de autoría: la autoría mediata y la coautoría" ("Teoría General del Delito", p. 200. Bogotá, Temis 1984).



25

51. Puestos frente al caso de un delito contra los derechos humanos cometido por las fuerzas de seguridad, el criterio de dominio del hecho permite establecer la existencia de una distribución funcional de roles que combina criterios de subordinación jerárquica y competencia operativa. A través de esta distribución de roles, se hace posible el control que ejercen los superiores sobre los actos de sus subalternos.
52. Al respecto: "la proximidad y la distancia de un delincuente o del otro en todos estos delitos, en relación al hombre que efectivamente mató a la víctima, no puede tener absolutamente ninguna influencia en lo que se refiere al alcance de la responsabilidad. La medida de la responsabilidad crece siempre más cuando uno se aleje de aquellos que ponen las armas letales en acción con sus manos, alcanzando a los escalones más altos del mando" (Sentencia contra Adolfo Eichman, Jurisdicción de Jerusalén expediente penal 40/6, citado en: Roxin, Claus: "Voluntad de dominio de la acción mediante aparatos de poder organizado" en Doctrina Penal Año 8, 1985 p.404).
53. El criterio del dominio funcional del hecho permite ubicar a quienes deciden la realización de un delito y quienes lo ejecutan, en el mismo nivel de responsabilidad criminal: todos ellos deben responder como coautores del delito. "Lo decisivo en la coautoría es que el dominio del hecho lo tienen varias personas que, en virtud del principio de reparto funcional de roles, asumen por igual la responsabilidad de su realización. Las distintas contribuciones deben considerarse, por tanto, como un todo y el resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad material de su intervención [...] Es necesario [...] que se contribuya de algún modo en la realización del delito (no necesariamente en su ejecución), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como un eslabón importante de todo el acontecer delictivo" (Muñoz Conde, op cit p. 203).
54. La esfera de autores quedaría completa si pudiéramos reconstruir la cadena funcional que realizó los delitos investigados desde el nivel de decisión hasta el nivel de ejecución. Sin embargo, ya que la relación entre ambos niveles de concurso es de co-autoría, podrá fundarse la responsabilidad penal de quienes deciden, incluso aunque los ejecutores directos del hecho no logren ser individualizados.
55. Este aspecto es importante no sólo porque los ejecutores inmediatos son siempre fungibles, es decir, intercambiables y



24

prescindibles (Roxin, Claus: "Voluntad de dominio de la acción mediante aparatos de poder organizado" en Doctrina Penal Año 8, 1983), sino porque, en general, los casos de delitos contra los derechos humanos se caracterizan por una concienzuda eliminación de pruebas y una permanente negación de los hechos de todos los agentes intervinientes, siendo por ello imprescindible recurrir a razonamientos deductivos que puedan dar significado a los escasos indicios que es posible hallar" (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de julio de 1988).

56. Estos criterios están recogidos por nuestra legislación a partir del artículo 23 del Código Penal vigente. Según su texto "El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible, y los que lo cometan conjuntamente, serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción". A través de este texto, el Código Penal amplió la esfera de personas responsables para alcanzar a todos aquellos que concurren en la realización del crimen sin tomar parte inmediata en su ejecución. De este modo quedó definitivamente modificada la tendencia asumida por el Código derogado de 1924, en base a cuyo texto podía limitarse las responsabilidades por un delito a los ejecutores del hecho.
57. Todo lo anotado permite sostener que, de acuerdo a las disposiciones vigentes en nuestra legislación, no es admisible condicionar la sanción de un crimen contra los derechos humanos a la previa identificación de quienes tomaron parte inmediata en su ejecución. Estos ejecutores no son las únicas personas que deben responder como autores del delito, y el proceso penal debe instaurarse siempre que sea posible individualizar al menos a una persona que actuó en tal calidad. Las normas penales vigentes permiten establecer la responsabilidad de todas las personas que actúan con dominio sobre los hechos, sea que aquel esté originado en su posición de control sobre el área involucrada o en su posición de mando sobre los ejecutores inmediatos del hecho.
58. Las disposiciones penales permiten también instaurar causas criminales contra todos aquellos funcionarios que hayan favorecido la impunidad del crimen, siempre que se haya individualizado el autor, eliminando u ocultando las pruebas del hecho o facilitando la fuga u ocultamiento de las personas involucradas.



IV. SOBRE LAS CUESTIONES DE HECHO QUE HAN QUEDADO DEMOSTRADAS ¹⁴.

4.1. Antecedentes.

59. El 21 de mayo de 1991, el Ejército Peruano intervino en la UNE. El 21 de enero de 1992 el Ejército Peruano estableció una Base Militar ("Base de Acción Cívica) en la UNE ¹⁷. Al interior del recinto universitario se dispuso la colocación de puestos de vigilancia y garitas de control en todas las vías de ingreso y salida. Según declaración presentada a esta Comisión por el General Nicolás Hermoza el día 8 de junio de 1993, esa Base habría estado compuesta por un número no menor de 40 ni mayor de 70 efectivos ¹⁸.
60. Por disposición de la Dirección de Bienestar Universitario se ha prohibido que cualquier persona, salvo autorización especial, ingrese o salga del local de la UNE entre las 22.00 y las 06:00 horas.
61. El cumplimiento de esta disposición ha estado, desde el 21 de enero de 1992, a cargo de la Base Militar acantonada en la Universidad ¹⁹. Con ocasión de estas medidas, los efectivos militares han efectuado detenciones de alumnos que han sido depositados en alguna de las casetas de vigilancia, así como de personas que, por no contar con documentos de identificación, han sido conducidos a la Comisaría del lugar. También con ocasión de estas medidas, se han realizado

¹⁴ Por razones de estricta humanidad y protección de las personas, la Comisión va a mantener en reserva los nombres de algunos de los testigos a lo largo de este capítulo. Debe señalarse que, sin perjuicio de ello, la Comisión conserva en sus archivos las actas de sus declaraciones y las constancias de su plena identificación.

¹⁷ Comunicado Oficial No. 001-COFI-92

¹⁸ En la primera declaración prestada por el general Hermoza Ríos a esta comisión el 19 de abril de 1993 indicó que los efectivos militares que custodiaban la UNE no podrían haber sido menos de 30.

¹⁹ Declaración del 9 de junio de 1993 del profesor Juan Silva Aguilar, encargado de la Dirección de Bienestar Universitario de la UNE en el momento de los hechos.



22

revisiones y requisas en los pabellones y viviendas de la Universidad ²⁰.

4.2. La incursión en el Pabellón de Varones

62. Aproximadamente a la 01:00 del día 18 de julio de 1993 ingresó a la Universidad un número no determinado de vehículos. Los alumnos varones llegaron a ver a tres de ellos ²¹, las alumnas indican haber llegado a ver a otros dos ²². El ingreso de vehículos solamente se puede efectuar por dos vías: (a) por la garita de control del ingreso principal, la cual permite el acceso a la pista que conduce al Pabellón de Varones o; (b) por la garita de control de la vivienda de docentes, esta última permite el acceso a la pista que conduce a las viviendas de los profesores. Ambos lugares estaban bajo control permanente del destacamento militar acantonado en la Universidad.
63. Luego del ingreso de los vehículos se apostaron, fuera del edificio del internado de varones, alrededor de 45 personas en dos filas, la más lejana de las cuales estaba compuesta por efectivos del Ejército ²³. La fila más cercana al edificio del internado estaba compuesta por efectivos vestidos de civil equipados con armas cortas, algunas de las cuales estaban provistas de silenciadores. Muchos de estos efectivos -entre ellos, todos los que vestían de civil- llevaban pasamontañas ²⁴.
64. Inmediatamente 15 de estos efectivos se dirigieron al Pabellón de alumnos Varones, ²⁵ donde solicitaron a viva voz, se les abriera la puerta de ingreso, a lo que se negó el alumno que

-
- ²⁰ Declaración del testigo No.3. Declaración del profesor Juan Silva Aguilar ante la Comisión, 09-06-93.
- ²¹ Declaración de testigos Nos. 2 y 3
- ²² Declaración de testigo No. 5
- ²³ Testimonio de Testigo No. 3.; Testimonio del Testigo No. 4.
- ²⁴ Declaración del testigo No. 2.
- ²⁵ Declaración del testigo No. 2.

27



(B)

dormía al lado de la misma. Entonces, los efectivos que realizaban la incursión ingresaron violentando una puerta de madera 26.

65. Ya en el recinto, entre gritos, amenazas e insultos, los efectivos en cuestión ordenaron a los estudiantes alojados tirarse boca abajo sobre el piso, indicando que aquel que levantara la cabeza sería maltratado. Los efectivos realizaron un minucioso registro, dañando algunos bienes personales de los alumnos. El grupo permaneció en las habitaciones de los estudiantes aproximadamente 5 minutos 27.
66. Se ordenó a los estudiantes salir del edificio. Como al realizarse la intervención ellos estaban durmiendo, algunos salieron casi desnudos y otros en ropa interior 28. Algunos alumnos observaron en este momento dos vehículos azules y un camión porta tropas 29.
67. Los alumnos intervenidos fueron trasladados en una fila al jardín exterior del internado 30, cuya iluminación permitía suficiente visibilidad 31. En ese lugar se les ordenó arrodillarse y bajar la cabeza prohibiéndoles levantar la mirada 32. Se solicitó a los alumnos que señalen, entre ellos, quienes eran terroristas 33. Luego, uno de los efectivos recorrió la fila con una lista, levantando violentamente las cabezas de los estudiantes y ordenando a cada uno decir su nombre en voz alta. Para facilitar o confirmar su identificación sus rostros eran iluminados con una linterna o reflector 34. Siete de los intervenidos

26 Declaraciones de los testigos Nos. 3 y 4.

27 Declaraciones de testigos Nos. 2 y 3.

28 Declaración testigo No 6.

29 Declaración testigo No 4. declaración testigo No 2

30 Declaración de testigo No. 2

31 Declaración de testigo No.2. Declaración de testigo No.3

32 Declaración de testigo No. 3

33 Declaración testigo No 4.

34 Declaración testigo No 2. Declaración testigo No 7



fueron seleccionados³⁶, golpeados y arrestados ³⁴. Uno de los estudiantes afirma que todo lo ocurrido se iba filmando ³⁷.

68. Los estudiantes detenidos y trasladados fuera del campus universitarios y desaparecidos hasta hoy fueron Robert Teodoro Espinoza; Marcelino Rosales Cárdenas; Juan Mariños Figueroa; Felipe Flores Chipana; Luis Enrique Ortiz Perea; Armando Amaro Cóndor y Heraclides Pablo Meza ³⁸.
69. Los otros alumnos reingresaron al internado, donde fueron amarrados con medias, alambres, y pasadores de zapatillas a sus camas, en posición cúbito ventral bajo amenaza de ser asesinados si se desataban. Un grupo de los efectivos intervinientes continuó el registro de objetos personales, revisando documentos de identidad y tomando ilícitamente objetos personales, como dinero y calculadoras ³⁹. Los efectivos que intervinieron se llevaron herramientas de trabajo para el campo. Los estudiantes internos, en su mayoría provincianos, cultivan la chacra para mantenerse, pues no cuentan con recursos económicos ⁴⁰.

³⁶ Declaración de testigo No. 2. Según las declaraciones recogidas, la selección la realizaba un individuo "gordo, alto y blancón".

³⁸ Los estudiantes que no fueron arrestados también fueron golpeados. Algunos de ellos fueron atendidos por la Dra. Cáceres del Departamento Médico durante la mañana del día siguiente. Los estudiantes arrestados fueron trasladados solamente con ropa interior y descalzos, no se les permitió como en otras ocasiones, vestirse, lo que llamo la atención de los alumnos. En anteriores intervenciones, donde terminaban detenidos en la DINCOTE, siempre se les permitió vestirse y llevar sus cosas.

³⁷ Declaración testigo No 4.

³⁹ Comunicación del Profesor Juan Luis Silva Aguilar, Director de la Oficina Central de Bienestar Universitario, La Cantuta, 24 de mayo de 1993; referido en Oficio No.121-93-R-UNE, del 10 de junio de 1993.

³⁹ Declaración testigo No 2.

⁴⁰ Declaración de testigo No 2.



(31)

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

70. La incursión duró entre 20 y 30 minutos ⁴¹.

71. Los alumnos que quedaron en el internado no salieron del edificio sino hasta las 6:00 de la mañana ⁴².

4.3. La incursión en el Pabellón de Mujeres.

72. El Pabellón de Damas se encuentra a unos 30 metros del lugar denominado "La Capilla", donde se encontraba acantonada la Base Militar del Ejército Peruano asignada a la Universidad ⁴³. Desde allí se podía divisar el Pabellón de Damas, las residencias de los profesores y otras áreas del Campus Universitario ⁴⁴.

73. En este pabellón el operativo se realizó después de las 02.00 de la madrugada ⁴⁵. Ingresaron al pabellón aproximadamente 15 efectivos ⁴⁶, algunos de civil y otros vestidos con chompas y pasamontañas negros y de colores, algunos con buzo impermeable azulino y botas. Todos portaban armas ⁴⁷. Una estudiante los reconoce como efectivos militares y civiles.

74. Al igual que en la residencia de varones, las estudiantes estaban durmiendo. Los efectivos que realizaron la intervención forzaron la puerta de ingreso y les ordenaron salir de sus

⁴¹ Declaración del testigo No. 4

⁴² Declaración de testigo No 3

⁴³ Declaración de Luz María Paz Sepulveda ante la Comisión, 23-05-93.

⁴⁴ Plano de la UNE, referido en Oficio No. 121.93-R-UNE, del 10 de junio de 1993. Inspección Ocular de los Congresistas Gloria Helfer y Julio Castro, conjuntamente con las autoridades universitarias.

⁴⁵ El testigo 1 sostiene que se realizó a las 02.30 horas, el testigo 3 afirma que eran las 02.45 de la madrugada.

⁴⁶ Declaración de la testigo No 5.

⁴⁷ Declaración de Testigo 5.



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

32

camas ⁴⁰. Las hicieron bajar hasta el primer piso, allí les apuntaron a la cabeza y les ordenaron ponerse de cara a la pared con los ojos cerrados ⁴¹. Jalándolas de los cabellos, una a una fueron puestas delante de un grupo encargado de identificarlas. A una señal de este grupo, fueron seleccionadas Bertila Lozano Torres y Dora Oyaque Fierro ⁴².

75. Los efectivos que intervinieron en esta operación ordenaron a las estudiantes no seleccionadas que se recostasen de posición cúbito ventral sobre el suelo ⁴³. Cerraron la puerta de ese ambiente con una cadena y un candado que ellos mismos habían llevado y luego se retiraron ⁴⁴.
76. Al momento de ser arrestada, Bertila Lozano fue golpeada contra la pared y envuelta en una frazada ⁴⁵. Norma Espinosa Ochoa regresó al internado luego de 10 minutos. Sus compañeras la atendieron porque estaba herida y golpeada. Al día siguiente ella se fue de la universidad, según indican, por miedo ⁴⁶.
77. Dos camionetas de color azul con luces rojas y azules, se encontraban estacionadas al lado de la piscina. Cuando terminó el operativo, los incursos se retiraron con los detenidos en esos vehículos ⁴⁷.

⁴⁸ Declaración de la testigo No 5.

⁴⁹ Declaración de testigo No 3. Declaración de testigo No 1.

⁵⁰ Declaración testigo No.1

⁵¹ Declaración testigo No.1.

⁵² Declaración testigo No.1.

⁵³ Declaración de testigo No.1

⁵⁴ Declaración del testigo No.5

⁵⁵ Declaración de Testigo No. 5.



33

4.4. La incursión en la casa del Profesor Hugo Muñoz Sánchez.

78. Aproximadamente a la 01.30 horas del día 18 de julio de 1992 ingresaron al domicilio del profesor Muñoz un grupo de efectivos del Ejército, todos vestidos con pasamontañas de lana negra, pantalón oscuro, botas, chompa de cuello alto negro y una chaqueta de colores. Al escuchar el ruido el profesor Muñoz se acercó a la puerta y al abrirla, dos de estos efectivos le cubrieron la cabeza con una tela negra, y se lo llevaron a la fuerza, sin permitirle hablar. Cuando la esposa del profesor, la señora Antonia Pérez Velásquez quiso intervenir, tres efectivos del Ejército no la dejaron salir, encañonándola con sus armas y diciéndole que no hablara y que se mantuviera quieta al lado de su hijo de un año de edad ⁸⁴. Simultáneamente otros ingresaron por la puerta posterior de la vivienda, destrozando la puerta del cuarto de servicio y abrieron las puertas de las habitaciones de la casa. Uno de los efectivos filmaba toda la incursión ⁸⁷.
79. El profesor Octavio Mejía Martel y su esposa la profesora Luz María de Paz Sepúlveda fueron testigos del arresto. Ellos se alojan en la vivienda E-14. La Sra. de Paz Sepúlveda estaba despierta en su hogar esperando el retorno de sus tres hijos de 21, 19 y 17 años. Escuchó ruidos y creyendo que eran sus hijos salió hasta la casa E-15. Siente pasos por atrás, de la casa de la familia Muñoz. Alcanza a distinguir a un grupo de personas vestidas de civil, entre las que se encontraba el Profesor Muñoz. La mayor parte de ellos llevaban armas. El profesor se encontraba sin camisa, sólo en pantalones, sin zapatos, con un trapo negro en la cabeza que le cubría los ojos y la boca y no le permitía hablar, aun cuando hacía ruido.
80. La señora de Paz Sepúlveda llamó a su esposo, quien ya se había unido a ella, y le dijo que se estaba llevando al "profesor Hugo", avisándole al profesor Muñoz de su presencia.

⁸⁴ La señora Pérez Velásquez fue impedida de salir de su casa hasta las 3.30 de la mañana, hora en la que salió pero fue nuevamente obligada a retornar a su casa por el personal del Ejército que custodia la universidad.

⁸⁷ Declaración de Antonia Pérez Velásquez, Expediente No.953-92, Habeas Corpus ante el 4to Juzgado de Instrucción de Lima, fojas 53. Declaración de Antonia Pérez Velásquez ante la Comisión, 20-05-93. Declaración de la Sra. Antonia Pérez Velásquez ante la Comisión, 20-05-93.



3A

CONGRESO CONSTITUCIONAL DEMOCRATICO

La señora de Paz Sepúlveda les preguntó por sus hijos a los efectivos que conducían a Muñoz, pero ninguno le respondió. La miraban y no le contestaban. Hasta que uno de ellos encañonándola le contestan "con ustedes no es, métanse adentro". Los hacen entrar a la fuerza a su casa. Ella insiste en preguntar por sus hijos, los efectivos le preguntan cómo se apellida y ella contesta "Mejía de Paz". Los hacen entrar y los ponen bajo la vigilancia de dos soldados y una persona vestida de civil. A las 03.00 trata de salir y vuelven a impedirsele.

Había 60 a 50 metros de la casa de la Sra. Luz María de Paz a la garita de control **.

4.5. Hechos posteriores.

81. A unos 10 metros del edificio del internado de varones, al costado de la carretera, en la chacra, se encontraba ubicado un puesto permanente de vigilancia que contaba por lo menos con 3 efectivos del ejército **. Este puesto funcionaba durante las 24 horas del día y sólo fue desactivado en abril de 1993, luego de formada esta Comisión. Dos días después del operativo el contingente del Ejército Peruano que permanecía en la UNE fue cambiado, incluyendo personal que los testigos reconocieron en la intervención al Pabellón de Varones.
82. Luego de la incursión disminuyeron las actividades de patrullaje dentro de la universidad.
83. Las personas vinculadas a los desaparecidos, autoridades universitarias y familiares, han realizado averiguaciones y gestiones en forma directa ante las Jefaturas de las Fuerzas Armadas de nivel departamental, regional y nacional .

-
- ** Declaración de la testigo Luz María de Paz Sepúlveda, 23-04-93.
- ** Declaración del Testigo No. 3. Inspección en el lugar de los hechos.



39

V. CONCLUSIONES *0.

1. Está probada la pre-existencia de las personas hasta la fecha desaparecidas.

Las versiones oficiales de la UNE, así como las declaraciones de los estudiantes, profesores y familiares permiten afirmar que las personas desaparecidas efectivamente existieron y mantenían un vínculo permanente de estudiantes y profesor con la UNE; residiendo también de forma permanente, en las viviendas de la UNE. Los estudiantes y el profesor se encontraban presentes en la UNE el día de los hechos. A partir del 18 de julio de 1992 se desconoce el paradero de esas personas.

En la residencia de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" (UNE), también conocida como La Cantuta, vivían 24 docentes. En la casa E-11 vivía en compañía de su familia el profesor asociado Hugo Muñoz Sánchez perteneciente a la Facultad de Pedagogía quien había sido autorizado para ello por la Resolución 493-R-UNE-90 *1.

Por resolución de la Oficina Central de Bienestar Universitario de la misma Universidad fue concedido el internado, y en consecuencia se autorizó a vivir en la vivienda estudiantil a los estudiantes desaparecidos, a saber:

- Bertila Lozano Torres (Resolución Directoral No. 04-92-OCBU del 25 de mayo de 1992)
- Dora Oyague Fierro (Resolución Directoral No. 04-92-OCBU del 25 de mayo de 1992)
- Robert Teodoro Espinoza (Resolución Directoral No. 05-92-OCBU, del 25 de mayo de 1992)
- Marcelino Rosales Cárdenas (Resolución Directoral No. 05-92-OCBU, del 25 de mayo de 1992)
- Juan Mariños Figueroa (Resolución Directoral No. 05-92-OCBU, del 25 de mayo de 1992)

*0 La Comisión ha considerado demostrada la realización de un hecho siempre que el material probatorio analizado permita descartar toda hipótesis contraria.

*1 Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", Dr. Alfonso Ramos Geldres, Rector, Oficio No. 121-93-R-UNE, 10 de junio de 1993.



CONGRESO CONSTITUYENTE ECUATORIANO

36

- Felipe Flores Chipana (Resolución Directoral No. 05-92-OCBU, del 25 de mayo de 1992)
- Luis Enrique Ortiz Perea (Resolución Directoral No. 05-92-OCBU, del 25 de mayo de 1992)
- Armando Amaro Cóndor (Resolución Directoral No. 05-92-OCBU, del 25 de mayo de 1992)
- Heráclides Pablo Meza (Resolución Directoral No. 05-92-OCBU, del 25 de mayo de 1992).

Además numerosos testigos han declarado haber visto a estos estudiantes horas antes de la intervención militar en una fiesta celebrada hasta las 18:00 horas del 17 de julio de 1992 ⁴².

2. Está demostrado que una base militar tenía el pleno control y dominio del área, especialmente en horas de la noche, en la que se produjo la desaparición forzada de las víctimas.

El destacamento militar que estaba en la UNE desde el 21 de mayo de 1991, acantonado en la Universidad, tenía diversos puestos desde donde controlaban todo el movimiento de personas dentro del Campus, especialmente durante la noche. Las dos únicas garitas de ingreso y salida de la Universidad estaban permanentemente vigiladas, a la vez que se realizaban frecuentes operativos de control en el entorno.

Esta intensa presencia militar confería a la unidad allí acantonada, dominio del área dentro de la cual se produjo la detención de las víctimas.

Al amparo de la Ley N. 25416 el mismo esquema de control ha sido aplicado, además de la UNE, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional del Centro (Huancayo), la Universidad Técnica del Callao y la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Huacho), todas las cuales han sido intervenidas por personal de las Fuerzas Armadas.

3. Está descartado que pudiera ingresar a la Universidad cualquier grupo de personas, especialmente en horas de la noche, fuera del control de la unidad militar allí acantonada.

⁴² Declaración del testigo N° 4 y declaración del testigo N° 3.



32

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

Dado el control de los lugares de ingreso a la Universidad, el patrullaje permanente de la misma, la existencia de un toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas, resulta imposible que un grupo extraño haya podido ingresar, permanecer en la UNE y desarrollar un operativo de la envergadura del descrito en el apartado sobre hechos, sin ser advertido por el control del destacamento militar.

4. Está descartado que las personas desaparecidas pudieran haber salido del Campus Universitario, menos en grupo, entre las 22.00 y 06.00 horas sin el control de la base militar a cargo de la vigilancia de la Universidad.

El control de los lugares de acceso a la Universidad, la existencia de puestos de vigilancia en diversos lugares del Campus Universitario, el ya mencionado patrullaje de la misma y la imposición del toque de queda, hacían prácticamente imposible que las personas desaparecidas pudieran haberse retirado de la Universidad sin conocimiento o control de los efectivos allí acantonados.

5. Esta demostrada en el Campus la presencia de diversos vehículos el día y hora de los hechos. Está probado que esos vehículos sólo podrían haber ingresado por las dos garitas de entrada, en esos momentos totalmente controladas por los efectivos del Ejército. Está probado que los militares cantonados en la UNE no opusieron resistencia al ingreso de esos vehículos a la UNE el 18 de julio de 1992, pasada la medianoche.

De acuerdo a los testimonios, a la inspección en el lugar de los hechos y al plano de la Universidad, los dos únicos lugares de acceso de vehículos son las dos garitas de ingreso vehicular; garita de control de la puerta principal y garita de control de la vivienda de docentes. Ambas estaban bajo el total control del personal militar acantonado en la UNE. El acceso de vehículos era imposible sin el conocimiento y aquiescencia de dichos efectivos.

Para ingresar al Campus Universitario, tanto los vehículos como el personal armado que entró debían tener, por lo menos, el consentimiento de la base militar allí acantonada.

Está demostrado que el 18 de julio de 1992 pasada la medianoche, ingresó a la UNE personal armado vestido a la usanza militar, llevando botas, chompas negras de cuello alto y pasamontañas.



29

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

Los declaraciones de los testigos que presenciaron los tres operativos realizados (en la residencia de hombres, en la residencia de mujeres y en la residencia del profesor Muñoz) describen en forma uniforme al personal que participó en estas operaciones. También se menciona uniformemente el uso de armas, algunas de las cuales llevaban silenciadores o correspondían a aquellas que son de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.

7. Está demostrado que el personal armado no identificado, además de ingresar a la UNE, se desplazó por la misma libremente, ingresó a edificios, seleccionó y detuvo a un grupo de estudiantes y al profesor, llegando incluso a filmar algunas de esas acciones, retirándose después de la Universidad.

Diversos testigos realizan una descripción similar del personal armado que ingresó a la Universidad y que participó en la selección de alumnos varones, la selección de alumnas y la reducción y detención del profesor Muñoz. La sucesión cronológica de los hechos coincide en todas las declaraciones y demuestra que el personal armado que ingresó al recinto se desplazaba libremente por sus instalaciones sin guardar ningún otro cuidado que el de resguardar su identidad.

8. Está demostrado que la base militar acantonada en la Universidad permitió que el destacamento armado que ingresó a la UNE realizara con toda libertad las acciones descritas en la Conclusión 7.

Como hemos anotado, el control del área, la existencia de puestos de vigilancia muy cercanos a los lugares en que se desarrollaron los hechos y el patrullaje continuo del Campus Universitario, hacían imposible que un grupo armado se desplazara libremente por el lugar y desarrollara un operativo como el que ha sido descrito.

El destacamento que realizó los hechos irrumpió violentamente en las viviendas de los estudiantes varones, en las viviendas de las estudiantes mujeres y en la casa de un profesor; obligó a los alumnos intervenidos a formar fila en un lugar descampado e iluminado; efectuó minuciosos registros en edificaciones de la Universidad y tuvo tiempo suficiente para atar de manos a los alumnos que no fueron detenidos, además de retener en su vivienda a la esposa del profesor desaparecido. Todas estas acciones tomaron aproximadamente dos horas al cabo de las cuales el destacamento en cuestión se retiró sin que la base acantonada en la Universidad interfiriese en absoluto.

Debe subrayarse que ni el Comandante General del Ejército ni los oficiales Generales entrevistados han presentado



37

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

aseveración alguna que permitiera concluir que el destacamento militar acantonado en la UNE impidió o intentó impedir el ingreso, actuación y posterior salida del grupo armado cuya acción se ha descrito.

9. Está demostrado que los efectivos acantonados en la UNE concurrieron a la realización de las acciones antes señaladas, resguardando y brindando apoyo al destacamento que realizó las acciones investigadas.

Hubo personal militar uniformado que apoyó al destacamento que intervino, tanto en la residencia de varones como en la de mujeres. También hubo personal militar uniformado que, luego de la detención del profesor Muñoz impidió a su esposa salir de su vivienda. Igualmente hubo personal militar uniformado que impidió a la profesora Luz María de Paz Sepúlveda y a su esposo intervenir luego del arresto del profesor desaparecido.

10. Está demostrado que el día 18 de julio de 1992, a la hora de los hechos, en las residencias universitarias de alumnos y docentes de la UNE, se desarrolló un operativo de seguridad, en el que intervinieron elementos armados no identificados llegados desde fuera con el apoyo del personal militar allí acantonado.

Las conclusiones anteriores así como la declaración judicial del General Nicolás Hermoza, permiten concluir en efecto que el día 18 de julio de 1992 a la hora de los hechos, se desarrolló en la UNE un operativo de seguridad, en el que participaron al menos algunos miembros de la base del Ejército acantonada en el lugar. Está probado también que en ese operativo participó personal armado que no pertenecería a esa unidad.

11. Hay indicios suficientes para sostener que los efectivos que ejecutaron los arrestos y la sustracción de las víctimas actuaron con conciencia del carácter delictivo de sus actos.

El operativo que ha sido descrito se realizó sin respetar en ningún aspecto los procedimientos legales vigentes para la detención de personas. Ninguna de las declaraciones de testigos ha hecho referencia a ninguna forma de identificación exhibida ni presentada por el destacamento que intervino en las viviendas. Tampoco se ha hecho referencia a la presencia de alguna persona que hiciera las veces de un Fiscal militar o civil. Los estudiantes arrestados fueron seleccionados en base a una lista de nombres, sin ser informados de los cargos levantados en su contra ni del lugar al que serían conducidos.



20

A diferencia de las intervenciones de la Policía antiterrorista (la DINCOTE), aquí no se permitió a las personas seleccionadas recabar prendas adecuadas para un periodo de detención; se les sustrajo tal como estaban vestidos, en ropas de dormir o incluso semidesnudos.

Todo ello induce a pensar que el personal que ejecutó estas acciones actuaba desde el inicio con la intención de realizar una desaparición forzada.

12. Existen indicios suficientes para señalar que la intervención del 18 de julio de 1992 corresponde a una operación de inteligencia realizada por alguna unidad especializada de las fuerzas de seguridad, que por lo menos contó con el concurso de algunos efectivos militares.

Entre ellos, puede citarse:

- (a) la naturaleza clandestina de la operación realizada;
- (b) tipo especial de las armas utilizadas (algunas de las cuales estaban provistas con silenciadores);
- (c) la subordinación del personal militar acantonado a los efectivos de civil;
- (d) la presencia de personal armado vestido de civil;
- (e) la insistencia en mantener en secreto su identidad;
- (f) la participación de personas que reconocían a los estudiantes detenidos;
- (g) el empleo de una lista previamente preparada.

En este punto, la Comisión debe recordar que sus investigaciones han debido afrontar impedimentos que han hecho imposible obtener las declaraciones de los oficiales y del personal que ha sido denunciado como ejecutor de los hechos investigados, entre ellos, quienes se encontraban acantonados en la UNE ese día y aquellos que aparecen mencionados en los documentos resumidos en este Informe.

A través de estos impedimentos se ha negado a esta Comisión la posibilidad de establecer qué unidad ejecutó el operativo del 18 de julio de 1992.

13. Ni el General Herraiza Ríos ni el General Salazar Monroe en sus declaraciones han aportado elemento alguno que permita descartar la probable responsabilidad de los efectivos militares denunciados públicamente como implicados en los hechos investigados.

La Comisión recibió denuncias públicas según las cuales el Mayor EP Santiago Enrique Martín Rivas, el Capitán EP Carlos



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

16

Eliseo Pichilingue, el Teniente EP Aquilino Portella Núñez y el Coronel Miranda Balarezo, concurrieron en la realización de los hechos investigados.

También se recibieron denuncias públicas según las cuales el General de Brigada EP Luis Pérez Documet y el Teniente Coronel EP Manuel Guzmán Calderón autorizaron la realización del operativo en mención. Se conocieron asimismo denuncias según las cuales el General de Brigada EP Juan Rivero Lazo y el Coronel EP Augusto Federico Navarro Pérez concurrieron a la realización de dicho operativo.

Ni el Comandante General del Ejército ni el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional han probado ante la Comisión que los oficiales, que fueron acusados por diversas versiones ante el CCD, hayan realizado en el momento de los hechos operaciones o actividades distintas de las descritas en las denuncias.

14. El General Nicolás Hermoza ha efectuado declaraciones diversas y evasivas sobre los hechos, que comprometen su responsabilidad, por cuanto ello permite pensar que ha encubierto deliberadamente a los efectivos que ejecutaron el operativo militar del día 18 de julio.

Ante el 14 Juzgado Penal de Lima, en los escritos del Habeas Corpus No. 953-92, el General Nicolás Hermoza aceptó la realización de un operativo militar. Luego dió otra versión al ser interrogado por la Comisión Investigadora negando que la Fuerza Armada como institución hubiere realizado tal operativo.

El General Hermoza de manera muy reiterada, en sus tres declaraciones (una judicial y dos ante esta Comisión), no ha ofrecido información sobre la realización del operativo militar del 18 de julio de 1992. Por su condición de Comandante General del Ejército, y representante de sus subordinados ante esta Comisión, debía tener información sobre esta operación, ya que en ella participó orgánicamente por lo menos la unidad militar acantonada en la Universidad, quedando demostrado por estos hechos que se privó de información indispensable a esta Comisión.

El General de División Nicolás Hermoza Ríos, al haber denunciado los hechos al Fuero Privativo Militar, después de iniciadas las acciones de esta Comisión, así como con sus declaraciones diversas y evasivas al respecto, han impedido la cabal culminación de la investigación parlamentaria.

15. Es indudable que el operativo investigado en este informe, por los extremos a que se ha llegado, constituye un delito común



(22)

de desaparición forzada de personas, que debe ser juzgado por las autoridades del Fuero Común, según el Código Penal.

Los delitos que deben ser conocidos por el Fuero Privativo Militar son sólo los delitos de función, es decir, aquellos previstos por el Código de Justicia Militar o los delitos comunes cometidos por un efectivo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en agravio de un efectivo de los mismos cuerpos. Los delitos contra los derechos humanos son delitos comunes tipificados como tales por el Código Penal y por leyes especiales y deben ser conocidos por el Fuero Común.

16. El Ministerio Público, a pesar de tener la competencia para investigar los hechos, no ha individualizado hasta ahora los autores ni ha formalizado denuncia penal por esos delitos.

A pesar de disponer de los principales elementos que ha tenido a la vista esta Comisión, el Fiscal Provincial encargado del caso no ha realizado ninguna diligencia destinada a individualizar a los responsables de los hechos investigados por esta Comisión. Esta omisión ha paralizado la prosecución de cualquier causa penal ante el Fuero Común, ya que las leyes procesales vigentes exigen, para iniciar la instrucción, que se individualice a los presuntos autores de los hechos.

A esto debemos agregar que el Ministerio Público no ha cumplido con solicitar la identificación de aquellos oficiales que, por el dominio funcional que ejercieron sobre los hechos, resultaban coautores de los hechos aquí investigados. Tampoco ha denunciado a quienes se han resistido a cumplir los requerimientos realizados en el curso de las investigaciones a cargo del Ministerio Público, a pesar de constituir presuntos delitos contra la administración de justicia.

17. El Fuero Privativo Militar no ha aportado a esta investigación ningún elemento de juicio que permita esclarecer los hechos, a pesar de la solicitud de la Comisión.

A pesar de los requerimientos de la Comisión, el Fuero Privativo Militar no nos ha alcanzado ningún dato que permita esclarecer responsabilidad legal alguna.

Por lo demás, hasta el momento de suscribirse este informe, el proceso iniciado ante el Fuero Privativo Militar continuaba siguiéndose "contra quienes resulten responsables", por lo que puede concluirse que, a pesar de contar con todos los elementos posibles, dicho Fuero no ha cumplido todavía con el fin fundamental de toda investigación judicial, la cual es contribuir a establecer la verdad de los hechos y las responsabilidades derivadas de su realización.

18. Durante la tramitación del proceso iniciado a consecuencia de estos hechos, como nunca ha sucedido antes, el Fuero Privativo Militar ha transgredido sus atribuciones con exceso, interfiriendo ilegalmente en el adecuado desarrollo de esta investigación.

El 29 de abril de 1993 el Comandante General del Ejército, General Nicolás Hermoza, solicitó autorización a la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar para disponer la concurrencia del personal militar requerido por esta Comisión. El día 30 la Sala de Guerra resolvió no autorizar la concurrencia del personal en referencia. Del mismo modo, prohibió se remita a esta Comisión la relación del personal militar que estuvo de servicio en la UNE el día de los hechos.

El 5 de mayo de 1993, el General Hermoza comunicó al CCD que no podía acceder a su requerimiento de citar al personal militar indicado.

Al momento de resolver, el Fuero Privativo Militar no tenía ninguna facultad legal para recortar las atribuciones de investigación del CCD ni condicionar la concurrencia ante él de ningún oficial de las fuerzas de seguridad. El Acuerdo de Cámara por el que la mayoría del Congreso decidió que toda declaración de personal de las fuerzas de seguridad se haga por delegación en sus superiores, recién fue adoptado el 24 de mayo de 1993. Además dicho acuerdo no tiene fuerza legal alguna.

Debemos anotar también que no existe en la historia del Congreso Nacional y del Fuero Privativo Militar un solo precedente de este tipo.

19. El Fuero Privativo Militar impidió ilegalmente la concurrencia ante esta Comisión del abogado Vladimiro Montesinos Torres.

El abogado Vladimiro Montesinos, Asesor ad honorem de la Jefatura del Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, ha sido públicamente acusado de concurrir a la realización del operativo investigado.

A base de esas denuncia, esta Comisión requirió la presencia del abogado Montesinos por oficio del 7 de junio de 1993. Recibido el requerimiento, el abogado Montesinos solicitó a la Sala de Guerra autorización para acatarlo, siguiendo el precedente establecido por la solicitud anteriormente presentada por el General Hermoza Ríos. El día 9 de junio la Sala de Guerra resolvió negar la autorización al abogado



AA

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

Montesinos, con un razonamiento análogo al empleado en la Resolución del 30 de abril.

En razón de esa prohibición esta Comisión se ha visto impedida de contar con los elementos necesarios para determinar adecuadamente el grado de responsabilidad que compete al abogado Montesinos en los hechos analizados.

20. El Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, General de División Julio Salazar Monroe y el Comandante General del Ejército y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, han declarado a esta Comisión desconocer el origen de los ingresos del Asesor de la Jefatura del Servicio de Inteligencia Nacional, abogado Vladimiro Montesinos Torres.

En su declaración ante esta Comisión el General de División Julio Salazar Monroe indicó que el Sr. Vladimiro Montesinos no recibía ninguna remuneración por sus servicios como asesor de la Jefatura del SIN. Preguntado por un miembro de la Comisión sobre el origen de los ingresos del abogado Montesinos Torres, el General Salazar Monroe dijo, literalmente: "eso no podría contestarle, tendría que preguntárselo a él".

En su declaración del 8 de julio de 1993, el General Hernández informó a esta Comisión que el abogado Montesinos trabaja las 24 horas del día para el Servicio de Inteligencia y no depende del Ejército. Dijo, literalmente: "No depende de mí, el SIN tiene un presupuesto, cuando digo yo 'no depende del Ejército' quiero decir que no depende ni funcionalmente ni administrativamente, cuando digo 'administrativamente', [quiero decir que] no depende ni presupuestariamente, ni por administración del personal, ni por administración de logística; no depende de ninguna manera del Ejército."

En sus declaraciones, ni el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ni el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional han alegado excepción de reserva sobre estas informaciones. La Comisión llama la atención sobre este hecho porque considera sumamente grave que el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional no tenga información sobre la forma en que obtiene sus ingresos la persona a quien reconoce como su asesor principal.

La Comisión expresa también su preocupación por el desconocimiento que de este punto ha demostrado el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tanto más que el abogado Vladimiro Montesinos tiene, por sus funciones, acceso a información vital para la Seguridad Nacional.



15

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

21. Está demostrada la responsabilidad política del señor Ministro de Defensa. El responsable del Pliego de Defensa, tiene la obligación de adoptar las medidas pertinentes para contribuir a esclarecer lo sucedido sobre los hechos del 18 de julio de 1992 en la UNE. Asimismo es él quien tiene el control y la responsabilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas.

Este hecho y su total pasividad al respecto, lo hacen pasible de responsabilidad política, a meritarse por el Congreso Constituyente Democrático, teniendo en especial cuenta la gravedad de lo sucedido.

22. El Ejército como institución tutelar de la Patria, no puede ser responsabilizado de los hechos investigados, tanto más que no se ha evidenciado en forma alguna que se hayan cumplido por las vías regulares, decisiones jerárquicamente adoptadas al respecto.

En la investigación no se ha encontrado ningún elemento de juicio que permita pensar que el Ejército como Institución ha intervenido jerárquicamente en la generación de los hechos investigados.



16

VI. RESPONSABILIDADES

1. De algunos miembros de las Fuerzas Armadas en la realización de los hechos.

- a. Existe presunción de responsabilidad penal del Jefe de la II Región Militar del Ejército y ~~de los demás~~ ^{aquellos} jefes y oficiales de dicha Región, de la Dirección de Fuerzas Especiales (DIFE), el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y del Batallón de Infantería N.39 (BIC 39 - La Pólvara), que ~~concedieron~~ ^{concedieron}, autorizaron, ocultaron, participaron o ejecutaron ~~el~~ el operativo.

A lo largo de la investigación efectuada se ha evidenciado que hay responsabilidad penal precisa e ineludible en los mencionados jefes y oficiales, por cuyo motivo corresponde que judicialmente se establezca y sancione dichas responsabilidades.

El Jefe de la II Región Militar en funciones el día de los hechos, General Luis Salazar Monroe, tenía bajo su autoridad a la Base Militar acantonada en la Universidad. Por tanto tuvo que ser necesariamente informado por el oficial a cargo de la Base de la UNE acerca de la realización del operativo, correspondiéndole ineludiblemente responsabilidades por acción u omisión que deben esclarecerse y sancionarse.

- b. Existe presunción de responsabilidad penal ~~que deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente~~ ~~deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente~~, en lo que concierne al siguiente personal militar: General de División EP Luis Pérez Documet, General de Brigada EP Juan Rivero Lazo, Coronel EP Miranda Balarezo, Coronel EP Augusto Federico Navarro Pérez, Teniente Coronel EP Roberto Huamán, Mayor EP Santiago Enrique Martín Rivas, Capitán EP Carlos Eliseo Pichilingue, Teniente EP Manuel Guzmán Calderón, Teniente EP Aquilino Portella Núñez

Existe presunción de responsabilidad penal, que deberá determinarse según las denuncias públicas que se han producido respecto de los hechos investigados, ~~se establece y sancionan las responsabilidades referentes~~ ^{mediante un análisis adecuado} ^{en cuanto a} ~~los jefes y oficiales antes mencionados, precisando la motivación con la que procedieron.~~



- c. Existe presunción de responsabilidad ^{penal} ~~que deberá determinarse en el correspondiente proceso judicial~~ ~~deberá determinarse en el~~ ~~proceso judicial~~ del General de División EP Nicolás Hermoza Ríos, Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada.

El General Hermoza Ríos debe responder por no haber denunciado oportunamente los hechos materia de la investigación, por no haber facilitado la investigación de los mismos y por no haber proporcionado la relación de efectivos que participaron y demás datos solicitados, a pesar de haber aceptado que tuvo lugar un operativo o rastillaje en el Campus de la UNE, ante el 14vo. Juzgado Penal.

- d. Existe presunción de responsabilidad penal de quienes tuvieron a su cargo la Base Militar acantonada en la UNE el día de los hechos, deberá ser establecido en la investigación judicial correspondiente.

Aunque se puede argumentar en el sentido de que la Jefatura y efectivos de la Base no necesariamente hayan tenido conocimiento de los resultados finales, debe determinarse judicialmente la responsabilidad penal.

- e. Existe presunción de responsabilidad penal que deberá ser determinada del destacamento que ejecutó el operativo investigado, ~~antes de~~ ^{previa} individualización de sus integrantes. Con los mismos fines, debe identificarse a los efectivos militares que concurrieron al mismo.

El Poder Judicial deberá identificar, individualizar y sancionar a estas personas. La Comisión deberá continuar su labor luego de este informe con el objeto de investigar en detalle estas responsabilidades y la vinculación de esta unidad con otras que participaron en el operativo.

- f. De conformidad con los alcances del Decreto Ley N.25635, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, alcanza presunción de responsabilidad penal al General de División EP Julio Rolando Salazar Monroe y a su asesor abogado Vladimiro Montesinos Torres.

Las declaraciones de los Generales Nicolás Hermoza y Salazar Monroe no proporcionaron ningún elemento que permitiera descartar esta responsabilidad.



40

ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMOCRATICO

El Poder Judicial deberá investigar y, en su caso, sancionar la conducta del abogado Montesinos Torres.

2. De algunos oficiales miembros del Fuero Privativo Militar.

- a. Existe presunción de responsabilidad funcional del Fuero Privativo Militar, cuyas Resoluciones del 30 de abril y del 9 de junio de 1993, constituyen actos de interferencia en el desarrollo de esta investigación, por cuanto, sin habilitación legal, impidieron la concurrencia de personas requeridas por la Comisión para que presenten declaraciones y hagan sus descargos en relación a diversas denuncias públicas sobre los hechos investigados.

Existe un nivel de subordinación del General de Brigada EP José Picón Alcalde con respecto del Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General del Ejército, General de División EP Nicolás de Bari Hermoza Ríos. La conducta funcional del primero resulta carente de imparcialidad para administrar justicia, como Presidente de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar. Un oficial de menor rango se encuentra cohibido de realizar las investigaciones pertinentes, en razón de la dependencia jerárquica.

La pericia grafotécnica ordenada por el Consejo Supremo de Justicia Militar sobre una relación de responsables, miembros del Ejército Peruano, presumiblemente escrita por el General Willy Chirinos Chirinos, sobre la desaparición de 10 ciudadanos de la UNE, no es válida porque ha sido realizada con una hoja de facsímil remitida por el General EP Robles Espinoza, la cual muestra deformaciones e imprecisiones gráficas. La pericia debe ser realizada con el documento original. Dicho original está en manos del General EP Robles, tal cual lo manifiesta en la respuesta al exhorto remitido a Buenos Aires por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

3. Del Poder Judicial y del Ministerio Público

- a. Existe presunción de responsabilidad penal en los Fiscales del Ministerio Público, por no haber formalizado hasta ahora la denuncia que corresponde por los hechos objetos de la investigación.



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

49

pag. 49

- b. Existe presunción de responsabilidad penal en los Magistrados de la ~~Sala Constitucional y Social~~ de la Corte Suprema de la República y de la ~~Quinta y Sexta Salas Penales~~ de la Corte Superior de Lima, que no cumplieron cabalmente con sus deberes de función en el tramitación de los recursos de Habeas Corpus concernientes a los hechos materia de investigación.

Debe precisarse que en el caso de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República y la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima han faltado a la verdad, al fundamentar sus fallos al firmar que no se había verificado la preexistencia física de los desaparecidos.

4. Del Congreso Constituyente Democrático

- a. Está demostrada la responsabilidad política de la mayoría del Congreso al haber abdicado de sus facultades de investigación y fiscalización.

Esta se hizo efectiva al aprobarse un Acuerdo por el que sólo podían asistir a la Comisión Especial de investigación los Comandantes Generales, el Director Genral de la Policía Nacional y los Jefes de los organismos integrantes del Sistema de Defensa Nacional. Esa decisión, muy similar a la decidida en el Consejo de Justicia Militar, limitó gravemente el desarrollo de la investigación de la Comisión, poniendo en grave peligro la naturaleza misma del Congreso al establecer un precedente que mutila las atribuciones del mismo.



49

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

VII. RECOMENDACIONES

1. Recomendaciones de carácter general:

- a. **Constitución de una Comisión del Congreso para el Fiscalización de las Actividades de Inteligencia del Estado.**

En el Congreso deben establecerse mecanismos para la Fiscalización de las Actividades de Inteligencia del Estado, con el objeto de ejercer un control político y democrático de las mismas. En especial debe fiscalizarse la asignación y gasto de partidas económicas reservadas y destinadas a operaciones de inteligencia. La actividad de inteligencia debe ser reservada y secreta, pero debe impedirse, en todo caso, que estas condiciones sean empleadas para encubrir la realización de operativos sin control que puedan favorecer la formación de un patrón consistente de prácticas ilegales.

- b. **Que el Congreso Constituyente Democrático demande al Ministerio Público para que desarrolle las acciones que se requieren a fin de que el Fuero Común asuma cuanto antes el conocimiento, juzgamiento y sanción de los hechos materia de la investigación. Asimismo que, remita de inmediato todo lo actuado por esta Comisión Investigadora al Ministerio Público para que formalice la denuncia.**

- c. **Que la investigación en la vía judicial de los hechos abarcados por la Comisión, debe llevarse con diligencia y cañida a la verdad, para establecer la presunta responsabilidad penal de todos quienes estén implicados en los misos, cualquiera que fuera su situación, rango o cargo.**

- d. **Que una vez individualizadas y probadas fehacientemente las responsabilidades que corresponden, debe sancionarse drásticamente a quienes resulten responsables, aplicándoles las penas que establece la ley.**

- e. **La Presidencia de la República y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas deben dictar y difundir Directivas que correponden y concuerden con el decreto Ley 25592 y demás disposiciones para cautelar el irrestricto respeto a la Constitución, las leyes y normas de Derechos**



(51)

Humanos, en las acciones que lleven a cabo la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú para combatir el delito de terrorismo.

- f. Que el Congreso Constituyente Democrático, para prevenir que se repitan en el futuro situaciones similares a los hechos materia de investigación, debe aprobar cuanto antes, los proyectos de ley que se acompañan. Los cuales proporcionan en especial a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional un marco adecuado para lograr el respeto a los principios y derechos consagrados en la Constitución.

2. Recomendaciones de carácter específico:

- a. Debe recomendarse al Presidente de la República separar del cargo al Señor General de Ejército Nicolás Hermoza Ríos, actual Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La Comisión ha podido notar la manifiesta dependencia de los miembros del Fuero Privativo Militar del Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Nicolás Hermoza. Por ello considera indispensable que el referido General sea separado de su puesto para garantizar el desarrollo autónomo de la investigación que sobre estos hechos debe instaurarse.

- b. El Ministerio Público debe individualizar y denunciar ante el Fuero Común a los responsables de los delitos ocurridos 18 de julio de 1992.

La Fiscal de la Nación debe dar cuenta al Congreso del desarrollo reciente de las investigaciones iniciadas por este caso, así como de las razones por las que no se han hecho efectivos los apercibimientos dictados hasta el momento.

- c. El Poder Ejecutivo debe dar cuenta al Congreso sobre las fuentes de remuneración del abogado Vladimiro Montesinos, asesor de la Jefatura del SIN.

Durante la investigación ha quedado demostrado que tanto el Comandante General de Ejército como el Jefe del SIN desconocen la fuente de los ingresos del referido funcionario. El acceso que por la naturaleza de sus



5

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

funciones tiene este funcionario a información clasificada del Sistema de Inteligencia Nacional hace imperativo esclarecer esta situación a través del Congreso.

- d. El Congreso debe mantener en su plenitud las facultades de investigación que la Constitución vigente concede a esta Comisión.

Se debe reconsiderar el Acuerdo del 24 de mayo de 1993, por el que se pretendió recortar las facultades de investigación parlamentaria. Debe además acordarse que esta Comisión continúe su labor investigadora.

Firman en señal de conformidad con lo anteriormente expuesto, a los 24 días del mes de junio de 1993,

ROGER CACERES VELASQUEZ
Congresista de la República
Presidente de la Comisión
Especial Investigadora

GILBERTO SIURA CESPEDES
Congresista de la República

GLORIA HELMER PALACIOS
Congresista de la República

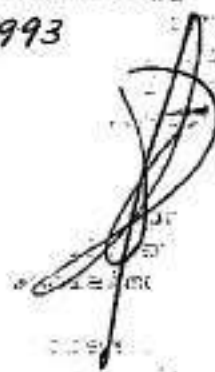
CARLOS CUARESMA SANCHEZ
Congresista de la República

JAIME FREUNDT-THURNE OYANGUREN
Congresista de la República

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

Lima, 25 de Junio de 1993

A la Orden del día

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a series of loops and a vertical stroke.



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

RECIBIDO	
OFICIALIA MAYOR DEL C.C.D.	
Fecha:	24/6/93
Hora:	6:55 pm
Firma:	

INDICE

MINORÍA

INTRODUCCION

1. Análisis de la documentación remitida por el Poder Judicial
 - 1.1. Habeas Corpus presentado por Raida Condor de Amaro con fecha 20 de Agosto de 1992.
 - 1.1.1 Declaración de Antonia Perez Velasquez y su ampliatoria.
 - 1.1.2 Declaración de Mercedes Quispe Mercantino.
 - 1.1.3 Declaración de Luz María de la Paz Sepúlveda de Mejía.
 - 1.1.4 Declaración del Dr. Gral Nicolás de Bari Hermoza Rios.
 - 1.1.5 Declaración del Gral Pablo Carmona Acha y su ampliatoria.
 - 1.1.6 La Sentencia expedida en Primera Instancia en este Habeas Corpus.
2. Análisis de los documentos remitidos por el Ministerio Público.
 - 2.1 Oficio No. 1243-93-MP-FN, con fecha 14 Abr 93.
 - 2.1.1 El oficio descrito en el punto 2.1, entre otros documentos consigna el informe No 140-DINTO-DINCOTE.
 - 2.2 Oficio No. 1244-93-MP-FN remitido al Dr. Roger Cáceres Velasquez.
3. Información recibida del Comando Conjunto de las FFAA.
 - 3.1 Oficio remitido por el Señor Comandante General del Ejército, dando respuesta a la petición formulada por la Comisión Investigadora sobre concurrencia de Personal Militar para proporcionar información.
4. Información recibida del Ministerio del Interior.
 - 4.1 Oficio No. 0695-I-N-SG, remitido al Dr. Roger Cáceres Velasquez.
 - 4.1.1 Parte No. 907-IC-DCH-PNP procedente del Area Distrital de Chosica.
 - 4.1.2 Parte 3062-DS-DINCOTE.



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

5. Declaración de Altos Oficiales de las Fuerzas Armadas.
 - 5.1 El Gral Hermoza Ríos, Comandante General del Ejército concurrió a la Comisión Investigadora el 20 Abr 93.
 - 5.2 Segunda visita realizada por el Gral. Hermoza Ríos, Comandante General del Ejército.
 - 5.3 Visita a la Comisión Investigadora del Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y del Auditor General.
 - 5.4 Visita del Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Gral. Julio Rolando Salazar Monroe a la Comisión.
6. Declaración del Jefe y Ex Jefe de la DINCOTE
 - 6.1 Declaración del Gral. PNP Domínguez.
 - 6.2 Visita a la Comisión del Gral. Ketín Vidal.
7. Declaración de autoridades de la UNE La Cantuta.
 - 7.1 Declaración del Rector Ramos Geldres.
 - 7.2 Declaración del Rector Laynes
 - 7.3 Testimonio del Director de Bienestar Universitario de la UNE Enrique Guzman y Valle, Sr. Luis Silva Aguilar.
8. Declaración de Testigos.
 - 8.1 Declaración de Luz María de Paz Sepúlveda de Mejía.
 - 8.2 Declaración de Antonia Perez Velasquez.
 - 8.3 Declaraciones de los Señores (2), (3), (4), (5) y (1) y señorita, recibidos el jueves 06 Mayo 93.
9. Visitas de la Comisión.
10. Visita de la Comisión a Buenos Aires - Argentina.
 - 10.1 Entrevista con el Gral. (R) Rodolfo Robles Espinoza.
11. Documentos enviados a la Comisión.
 - 11.1 Documentos entregados a la Comisión por los familiares.
 - 11.2 Documentos que llegaron en forma anónima a la Comisión.
 - 11.3 Documentos que presentaron a la Comisión otros Congresistas.



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

12. Visitas de Instituciones Extranjeras a la Comisión Especial.

13. Valoración de la prueba.

13.1 Aspecto subjetivo.

13.2 Aspecto legal.

13.3 Fase crítica.

14. CONCLUSIONES GENERALES

15. CONCLUSIONES ESPECIFICAS

16. RECOMENDACIONES



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

SEÑOR PRESIDENTE:

El 30 de Marzo de 1993, los Señores Congresistas Fernando Olivera Vega y Carlos Cuaresma Sánchez, presentan una Moción de Orden del día, la que sustancialmente dice:

Que en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - "La Cantuta" se encuentra acantonado un destacamento militar dentro del Campus Universitario desde Mayo de 1991. Que a la 01:30 am. del día 18 de Julio de 1992, un contingente de elementos presuntamente del Ejército, vestidos con pantalones oscuros, chompas tipo cuello de tortuga de color negro, encapuchados y armados ingresaron a las residencias de los profesores y estudiantes (varones y damas) de dicha Universidad, producto de esta intervención, se llevaron a un profesor y a nueve estudiantes, desde el momento de su detención, el citado profesor y los estudiantes se encuentran en calidad de desaparecidos, no siendo habidos por sus familiares que imploran por su aparición con vida.

Proponen a consideración del Pleno, la siguiente Moción de Orden del día:

El Congreso Constituyente Democrático acuerda:

1. Expresar su preocupación por la desaparición del Profesor Hugo Muñoz Sánchez y los estudiantes: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Mariños Figueroa, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor y Heráclides Pablo Meza, hecho acaecido el día 18 de Julio de 1992, por un contingente presumiblemente de elementos militares.
2. Nombrar una Comisión Investigadora de los hechos materia de esta Moción, integrada por cinco Congresistas, la que deberá trabajar con las reservas y la celeridad del caso.
3. El Presidente del Congreso propondrá en esta Sesión los nombres de los Congresistas a fin de que de inmediato inicien sus funciones.

El Congreso Constituyente Democrático, en Sesión celebrada el día 02 de Abril de 1993, aprobó por unanimidad la Moción de Orden del día de fecha 30 de Marzo de 1993, designándose a los señores Congresistas:

Róger Cáceres Velásquez
Gilberto Siura Céspedes
Gloria Helfer Palacios
Carlos Cuaresma Sánchez
Jaime Freundt-Thurne Oyanguren



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

Como miembros de la Comisión Investigadora de los sucesos ocurridos en la UNE-La Cantuta el 18 de Julio de 1992. Instalada la Comisión, ésta utiliza como método de trabajo la obtención de informaciones de las Instituciones siguientes:

- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
- Ministerio del Interior

Recibe declaraciones de:

- Altos Jefes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
- Autoridades de la UNE- La Cantuta
- Testigos presenciales de los hechos

Recepciona los siguientes documentos enviados a la Comisión:

- Documentación presentada por los familiares de los desaparecidos
- Documentos que llegan en forma anónima a la Comisión
- Documentos que llevan a la Comisión otros Congresistas

Recibe la visita de:

Representantes de America's Watch y representantes de las Iglesias Misioneras Extranjeras, así como representantes de otras Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Defensoras de los Derechos Humanos.

Debe de anotarse que lo anteriormente glosado es lo más relevante de la investigación realizada, no siendo lo único que se actuó con el fin de realizar a cabalidad el trabajo encomendado a la Comisión Investigadora.

1. Análisis de la documentación remitida por el Poder Judicial

El Poder Judicial a pedido de la Comisión Investigadora, remite copias certificadas de las acciones de Habeas Corpus interpuesta una por Raida Cóndor de Amaro, madre de uno de los desaparecidos, así como del Habeas Corpus interpuesta por Jaime Oyague Velasco, tío de una de las desaparecidas y del Habeas Corpus presentado por el doctor Andrés Calderón Mendoza, abogado de la UNE- La Cantuta, realizándose una exhaustiva investigación en la acción de Habeas Corpus interpuesto por Raida Cóndor de Amaro, en donde con fecha 08 de Enero de 1993, se emitió la sentencia de Primera Instancia declarando IMPROCEDENTE la Acción de Garantía incoada por Raida Cóndor, sentencia que fué confirmada en todos sus extremos por la Sala Penal el 19 de Febrero del presente año y, finalmente el 29 de Marzo del año en curso, la Sala Penal de la Corte Suprema de la República, declaró



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista, con lo que concluyó definitivamente esta acción al expedirse la referida Ejecutoria Suprema.

1.1. Habeas Corpus presentado por Raida Cóndor de Amaro en fecha 20 de Agosto de 1992

Es presentado ante el 14o. Juzgado Penal de Lima. Este Habeas Corpus se interpone contra el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, su Consejo de Ministros, contra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, contra el Jefe Militar responsable de la zona en que se ubica la UNE La Cantuta, contra el Jefe Militar que ocupa el Campus Universitario y contra los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que están bajo el mando de los anteriores, así como contra toda persona civil, policial y/o militar que resultare responsable directa o indirectamente por atentar contra la Libertad Individual, seguridad e integridad del profesor y los estudiantes desaparecidos en la UNE La Cantuta.

JK
Durante la tramitación de este Habeas Corpus, se reciben importantes declaraciones tanto de civiles como de Jefes de las Fuerzas Armadas; así tenemos:

1.1.1. Declaración de Antonia Pérez Velásquez y su ampliatoria.

(Circled signature)
La deponente, es esposa del profesor Hugo Muñoz Sánchez, testigo presencial de los sucesos ocurridos el día 18 de Julio de 1992, en que desaparece su esposo.

"El día 18 de Julio de 1992, nos encontrábamos durmiendo mi esposo y yo en nuestra residencia de la UNE La Cantuta, a eso de la 1.30 am., ingresa con violencia un grupo de militares que presumo, sea del Ejército por la vestimenta que llevaban: pasamontaña negro, pantalón oscuro, chompa cuello alto, chaqueta de colores, procediendo a amordazar a mi esposo, el que estaba solo con pantalón puesto, colocándole en la cabeza un trapo negro, llevándoselo contra su voluntad, cuando se lo llevaron por la puerta de la casa hacia la Garita de Control de Salida, fue visto por dos profesores residentes, quienes quisieron intervenir para saber lo que pasaba, los encañonaron con sus armas y los hicieron regresar a su casa, yo quedé encerrada en mi dormitorio y estuvieron custodiando la puerta hasta mas o menos las 03.30 am. Simultáneamente ingresaron al internado de varones y señoritas y se llevaron a siete jóvenes y dos señoritas en dos camionetas de color rojo, doble cabina. En su declaración ampliatoria, Antonia Pérez Vásquez agrega que tenían armas cortas, eran tres sujetos los que se llevaron a su esposo, habiendo entrado algunos más a su casa por la puerta posterior rompiéndola.

1.1.2. Declaración de Mercedes Quispe Marcantino



El día de los hechos, refiere la deponente: Se encontraba durmiendo en el segundo piso de la habitación 186 del internado de la UNE La Cantuta, a las 02.00 a. m. entraron efectivos militares y de civiles a los cuartos, sacando a golpes a las estudiantes, las tiraron al piso, preguntándome por unas chicas que yo no conocía, levantándome a mi y a Dora Oyague Fierro, una de las desaparecidas; nos volvieron a meter al internado, tirándonos nuevamente al piso, igual suerte corrió mi amiga, al levantarnos habían desaparecido dos chicas Dora Oyague Fierro y Bertila Lozano Torres.

Agrega la deponente que unos días antes, su enamorado Juan Gabriel Figueroa (desaparecido también), le contó que habían sido amenazados por el Teniente Merino y también le dijo a la deponente su amiga Bertila Lozano que la habían amenazado, de su declaración se deja ver que los sustractores llevaban una lista de personas y al no estar en dicha lista Norma Espinoza, no se la quiso llevar el Teniente Medina.

1.1.3. Declaración de Luz María de la Paz Sepúlveda de Mejía.

La deponente reside en la UNE La Cantuta E-14, refiere sobre el día de los hechos lo siguiente:

El 18 de Julio de 1992, a la 01.30 a.m., mi esposo Octavio Mejía Martel y yo sentimos ruidos de pasos y como mis tres hijos menores no llegaban, salimos a ver, a unos quince metros observamos a un grupo de personas civiles con pasamontañas y armas, que llevaban a Hugo Muñoz Sánchez.

1.1.4. Declaración del Señor General Nicolás de Bari Hermoza Ríos.

El General antes mencionado, rindió una declaración y dos ampliatorias ante el Poder Judicial, a través de todas ellas, informa cómo se canalizan las órdenes de su Comando, las que son de carácter genérico y deben ser ejecutadas por el Comando subordinado el que decide la forma de llevarse a cabo dicha orden, que para el caso de la UNE La Cantuta, ese Comando es el del Comandante de la Segunda Región Militar.

Debe anotarse, que, el General Hermoza Ríos manifiesta que las operaciones de rastrillaje, están autorizadas por el Decreto Legislativo 752, Dispositivo Legal que permitió que las Fuerzas Armadas ingresaran con anterioridad el 18 de Julio de 1992 a la UNE La Cantuta, que en lo que respecta a la aparente contradicción que pudiera darse entre si hubo o no intervención el día 18 de Julio de 1992 en la UNE La Cantuta, aclara que entre lo manifestado por el deponente y por el General Pablo Carmona Acha no hay contradicción alguna, toda vez que las órdenes que da el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas son de carácter genérico, y es el Comando subordinado el que las ejecuta en la forma que tiene a bien; en este caso, el Jefe de la II Región



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

Militar, a cargo del General Pablo Carmona Acha.

1.1.5. Declaración del General Pablo Carmona Acha y sus ampliatorias.

Manifiesta este General que él era el Segundo Comandante Militar de la Segunda Región Militar, siendo el General de División Luis Salazar Monroe quien estaba al mando de ésta el día de los acontecimientos; precisa claramente que en dicha fecha no se ha realizado ningún operativo en la UNE La Cantuta, en su declaración ampliatoria afirma categóricamente que aquel día no se realizó ningún rastillaje en la UNE La Cantuta, consecuentemente, no se realizaron detenciones y que por ello tampoco se elevó ningún parte a la Superioridad.

1.1.6. La Sentencia expedida en Primera Instancia en este Habeas Corpus, señala en sus considerandos:

Que de las declaraciones del Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Comandante de la Segunda Región Militar; se desprende que el día 18 de Julio de 1992, los miembros de las Fuerzas Armadas no han incursionado, intervenido o realizado operativo militar alguno en la residencia de estudiantes de la UNE La Cantuta, que en virtud del Decreto Legislativo 752, las Fuerzas Armadas tienen autorización de permanecer en la citada Universidad, que la única testigo presencial de los hechos es la esposa del profesor Hugo Muñoz Sánchez, quién además de narrar la forma y circunstancias como ocurrieron los sucesos donde fué posiblemente secuestrado su esposo, no proporciona mayores datos claros y precisos, no da explicación como se enteró de la identificación de un Teniente de apellido Medina, ni corrobora a su dicho con otras pruebas fehacientes, que reconoce que tiene conocimiento que algunos de los presuntos desaparecidos están apareciendo, lo que da credibilidad a lo afirmado por el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del recorte periodístico que menciona la aparición de dos desaparecidos, es pertinente establecer que en esta sumaria investigación, no está probado que el día 18 de Julio de 1992, en horas de la mañana miembros de las Fuerzas Armadas o Policiales hayan realizado incursión, intervención y/u operativo en la Residencia de Estudiantes de la UNE La Cantuta, por estas consideraciones falla declarando Improcedente la Acción de Garantías Constitucionales de Habeas Corpus incoada por Raída Córdor de Amaro.

Sobre el particular, ésta Sentencia ha sido confirmada en todos sus extremos por la Resolución de Vista del 08 de Enero de 1993 dictada por la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima; sobre la cual, la Corte Suprema de la República ha declarado NO HABER NULIDAD; es decir confirmó la Sentencia de



Vista antes mencionada.

Como se aprecia esta es la documentación remitida por el Poder Judicial a la Comisión, la misma que habiendo sido analizada en lo pertinente, para los efectos del trabajo de la Comisión Investigadora, se valorará el mérito de estos actuados judiciales en la parte correspondiente del presente informe.

2. Análisis de los documentos remitidos por el Ministerio Público.

2.1 Oficio No 1243-93-MP-FN, con fecha 14 de Abril de 1993, la Fiscal de la Nación.

Remite al Tercer Vice Presidente del Congreso Constituyente Democrático, Señor Víctor Joy Way Rojas el Oficio mencionado, cuyo asunto es según se expresa en el propio documento, la Situación Jurídica de los ciudadanos detenidos por presuntos delitos de terrorismo el 18 de Julio de 1992, en la Residencia Estudiantil de la UNE La Cantuta.

Refiere el documento que enterada la Fiscalía de la Nación de los sucesos ocurridos el 18 de Julio de 1992, dispuso oficiar a la 8va. Fiscalía Provincial Penal de Turno el día de los acontecimientos, a cargo del Dr. Gustavo Quiróz Vallejos para que realice las investigaciones del caso. Llevada adelante la investigación, el Fiscal Provincial informa mediante Oficio 004-93-8oFPPL que luego de efectuadas las verificaciones en la Dirección de Seguridad del Estado y la DINCOTE se ha podido apreciar que las mencionadas personas no han sido detenidas en dichas Dependencias, que asimismo, la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ha emitido el Parte 368-IE-DIPD de fecha 02.09.92 con resultado negativo. Se recepciona el Oficio No. 266-SGMD-M cursado por el General de Brigada Tomás Caveró Vicentelo, Secretario General Accidental del Ministerio de Defensa, quien comunica al Ministerio Público que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no ha detenido ni capturado, bajo ninguna circunstancia a los estudiantes mencionados en su Centro de Estudios, asimismo, indica que la VII Región de la PNP y los Directores de Inteligencia y contra el terrorismo informan que no se llevó a cabo ninguna operación policial el 18 de Julio de 1992, en la UNE La Cantuta. Mediante Oficio No. 37-93-14-FPPL-MP, el Fiscal de la 14o. Fiscalía Provincial Penal informa que por indagaciones hechas por su Despacho en la Dirección Nacional Contra el Terrorismo, estas personas no se encuentran registradas como detenidos sujetos a investigación por delito de terrorismo, asimismo, el Fiscal de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, informa de las visitas realizadas a la División de Seguridad del Estado con fecha 24 de Julio de 1992 a la División de Investigación contra el Terrorismo, a la 18o División Blindada del Ejército el 27 de Julio de 1992 y al Centro de Instrucción



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

de la Policía Nacional, ubicado en el Fundo Barbadillo, sin obtener resultados positivos respecto a la presencia de los desaparecidos. Así también, el Fiscal de la Vigésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, remite el Oficio 2963-DINCOTE de fecha 09 de Marzo de 1993, en el que se informa que Robert Teodoro Espinoza, Armando Amaro Cóndor y Felipe Flores Chipana fueron detenidos el 22 de Mayo de 1992, procedente de la EPT de Chosica con el Oficio No. 30-SE-EPTCH y luego fueron puestos a disposición de DIRSEG el 04 de Junio de 1991, con el Oficio No. 5665-DINCOTE; Marcelino Rosales Cárdenas figura detenido el 11 de Octubre de 1991 con el Parte No. 3205-D8-DINCOTE y luego puesto en libertad el 14 de Octubre de 1991. Se ha recibido el Oficio 257-93-430.FPPL de fecha 30 de Marzo de 1993 de la Fiscalía Provincial AD-HOC de terrorismo, quien remite el Informe No. 140-DINTO-DINCOTE; donde se señala la información referencial por terrorismo de la División de Inteligencia de Lozano Torres Bertina o Bertila, de quién se conoce está realizando actividades a favor de Sendero Luminoso.

2.1.1. El Oficio descrito en el punto 2.1., entre otros documentos consigna el Informe 140-DINTO-DINCOTE, en el que se indica lo siguiente:

Que habiendo revisado el archivo computarizado de esta dependencia se ha verificado que:

Lozano Torres, Bertina o Bertila: Se conoce que estaría realizando actividades a favor de Sendero Luminoso.

Teodoro Espinoza, Robert Edgard: Detenido en Mayo de 1992 y puesto a disposición de la DINCOTE, no se le encontró responsabilidad por delito de terrorismo.

Rosales Cárdenas, Marcelino Máximo: Intervenido en Octubre de 1991, no se le encontró responsabilidad.

Flores Chipana, Felipe: En Mayo de 1992 fue detenido, no se le llegó a encontrar responsabilidad en terrorismo.

Amaro Cóndor, Armando Richard: En Mayo de 1991 fue detenido, no se le encontró responsabilidad en terrorismo.

2.2. Oficio No 1244-93-MP-FN, remitido al Doctor Róger Cáceres Velásquez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente Democrático.

En este Oficio se hace una síntesis del documento tratado en el punto 2.1. de este Informe, no aportándose ningún nuevo elemento de juicio, por lo que resulta suficiente el resumen



hecho en el punto antes mencionado abarcando así el propio documento que motiva el punto 2.1. como al Oficio 1244-93-MP-FN.

3. Información recibida del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

3.1. Oficio remitido por el Señor Comandante General del Ejército dando respuesta a la petición formulada por la Comisión Investigadora sobre la concurrencia de Personal Militar para proporcionar información.

En dicho oficio manifiesta el Comandante General del Ejército que el pedido para que se disponga la concurrencia de varios señores Oficiales del Ejército Peruano, a fin de que proporcionen algún elemento de juicio con relación al asunto que dió lugar a la creación de nuestra Comisión, no va a poder ser atendida como era su deseo en vista de que la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar por Oficio No. 273-SG-CSJM del 16 de Abril de 1993 le expresó que, habiendo radicado jurisdicción y abierto instrucción contra los que resulten responsables de delitos en agravio de un profesor y varios alumnos de la UNE La Cantuta, ninguna autoridad podía avocarse al conocimiento de causa pendiente ante dicho Organo Jurisdiccional Militar ni interferir el ejercicio de sus funciones; para lo cual acompaña copia del Oficio citado, copia del Dictamen del Fiscal Militar, del Auditor Militar y de la Resolución denegatoria de la Sala de Guerra.

Asimismo, el señor Comandante General del Ejército manifiesta que, ante esta situación y en su propósito de colaborar de la manera mas amplia con nuestra Comisión ha interpuesto Recurso de Apelación contra lo resuelto por la Sala de Guerra, esperando lograr su Revocatoria en la Instancia Jerárquica Superior.

4. Información recibida del Ministerio del Interior.

4.1 Oficio No 0695-I-N-SG, remitido al Doctor Róger Cáceres, Presidente de la Comisión Investigadora Caso La Cantuta, por el General de División Juan Briones Dávila Ministro del Interior, en el que remite copia de los Partes No. 907-IC-DCH-PNP del 14 de Agosto de 1992 y No. 3062-D5-DINCOTE del 17 de Agosto de 1992.

4.1.1 Parte 907-IC-DCH-PNP, procedente del Area Distrital de Chosica - Chaclacayo se ha recibido el Memo 100-JCP/JAD/CH.

Diciendo que sobre la detención de un profesor y nueve estudiantes cumple con informar a ese Superior que en la fecha 18 de Julio de 1992, personal PNP de esta Delegación PNP no ha



intervenido a la UNE La Cantuta, ni menos ha detenido a Catedráticos, Personal Administrativo, ni alumnado de dicha Casa de Estudios Superiores.

4.1.2. Parte 3062-D5-DINCOTE, en éste se informa lo siguiente:
Que el personal de la DINCOTE (Delta 5) bajo cuya jurisdicción y área de responsabilidad se encuentra la UNE La Cantuta no ha participado en ningún operativo sólo ni conjunto con el EP el 18 de Julio de 1992.

Revisado el Libro de Control de Detenidos que se lleva en la OCD de esta DINCOTE, se ha verificado que las personas solicitadas no se encuentran registradas como detenidas, revisión efectuada del 18 de Julio de 1992 al 17 de Agosto de 1992.

5. Declaración de Altos Oficiales de las Fuerzas Armadas.

5.1. El General Hermoza Ríos, Comandante General del Ejército concurrió a la Comisión Investigadora el día 20 de Abril de 1993, esta reunión tuvo dos etapas.

En una primera, expone a la Comisión sus puntos de vista con relación a los sucesos del 18 de Julio de 1992 en la UNE La Cantuta, en la segunda y última parte de la reunión responde preguntas de Congresistas allí presentes.

Resumen de la exposición del Señor General del Ejército Peruano Comandante General del Ejército:

Raida Cóndor de Amaro en Agosto de 1992, interpone dos Acciones de Habeas Corpus en el 14o. y 4o. Juzgados Penales de Lima contra el Presidente de la República, altos Jefes del Ejército y de la Policía Nacional, acciones de garantía que luego de haber sido tramitadas por el Organismo Judicial correspondiente, han sido declaradas Improcedentes, con lo que ha quedado agotado este procedimiento y desvirtuada la participación de personal de las Fuerzas del Orden en los hechos denunciados.

Igualmente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no ha permanecido indiferente a las denuncias hechas por los medios de comunicación respecto a la presunta desaparición de un profesor y varios estudiantes de la UNE La Cantuta ya que solicitó información sobre los hechos al Director General de La Policía Nacional, recibiendo respuesta que personal de la PNP sólo ni con apoyo de personal del Ejército Peruano en operativo conjunto, han tenido participación alguna, no habiéndose detenido por tanto a ninguna de las diez personas cuya desaparición se denuncia.

De otro lado, manifestó que en defensa del prestigio del Ejército como Institución Tutelar, de sus autoridades e



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

integrantes, con fecha 15 de Abril del año en curso, ha presentado dos denuncias ante el Fuero Privativo Militar con la finalidad que luego de una investigación serena, seria y responsable:

- Se identifique al autor ó autores del documento anónimo que lleva el logo de COMACA a fin de que se les sancione.

- Se determine la verdad o falsedad de las informaciones que se han propalado en el sentido de que personal militar habría tenido participación en los hechos materia de la investigación; ya que administrativamente a través de una investigación practicada por la Inspectoría General del Ejército, se ha llegado a la conclusión indubitable que el Ejército como Institución y en particular ninguno de sus miembros de las Fuerzas Armadas han tenido participación alguna en la presunta desaparición de los estudiantes y el profesor de la UNE La Cantuta.

Con todo lo expresado dice el General Hermoza Ríos, ha quedado fehacientemente acreditado:

- OK
- EF
- a) Que las Fuerzas del Orden y específicamente, el Ejército Peruano, no ha intervenido ni ha tenido participación alguna en la presunta desaparición de un Catedrático y varios alumnos de la UNE La Cantuta.
 - b) Que personas ó sectores opuestos a la Política de Pacificación del Gobierno y con el ánimo de lesionar la imagen de nuestra Institución, escudándose en un documento apócrifo y en el anonimato difunden una versión a los medios de comunicación, los que sin mayores elementos de juicio objetivos, involucraron al Ejército Peruano.
 - c) El Ejército Peruano así como los miembros de esta Comisión, son los primeros interesados en que se investigue exhaustivamente todos los hechos que pudieran implicar violación de los Derechos Humanos, y que no vacilarán en aplicar las más drásticas sanciones si hubieren responsables.

Segunda parte de la Exposición del Comandante General del Ejército ante la Comisión Investigadora :

Formuladas diversas preguntas por los Señores Congresistas, el señor Comandante General del Ejército manifestó que no hubo ningún operativo el día 18 de Julio de 1992 en la UNE "La Cantuta". Aclaró luego, que las órdenes que da su Comando son de carácter genérico para ser aplicadas por los Jefes de las Regiones Militares; para el caso específico de la UNE La Cantuta, tendrían que ser ejecutadas por el Jefe de la II Región Militar, pero que pueda dejar claramente establecido que ese día no se



realizó operación militar alguna en dicho centro de estudios.

Respecto a lo sucedido en La Cantuta y tratando de plantear algunas hipótesis de trabajo, manifestó que es posible admitir que probablemente haya sido un Grupo Armado No Militar; debiendo considerarse para la investigación cuatro hipótesis:

- Que fuera personal del Ejército
- Que fuera un Grupo Para Militar
- Que fuera Sendero Luminoso
- Que fuera Autosequestro

Añadió que las Fuerzas del Orden utilizan pasamontañas como medida de seguridad personal, pero que es fácil comprobar, por las incautaciones hechas a diversos grupos terroristas, que éstos también usan uniformes y prendas de vestir, como pasamontañas de uso militar.

Con relación a los desaparecidos manifestó el Comandante General del Ejército que tiene conocimiento que dos profesores respecto a los cuales se les consideró en calidad de desaparecidos, los mismos que acogidos luego a la Ley de arrepentimiento se han entregado en la Zona de Huancayo. Precizando que es el respeto a los Derechos Humanos lo que forma parte esencial de la Política de Pacificación Nacional, habiendo dado su Comando una Directiva específica sobre el comportamiento a seguir en relación a los delincuentes terroristas.

En cuanto al trabajo realizado por la DINCOTE e Inteligencia del Ejército, indicó que se ha podido desarticular grupos senderistas al interior de la UNE La Cantuta.

Asimismo, en la reunión con la Comisión Investigadora, el general Hermoza Ríos entregó al Presidente de la Comisión copia del Dictámen Pericial de Grafotecnica No 979/93, realizado por la Policía Nacional en el documento de nueve páginas titulado: "Cronogramas de la Exposición al Señor Gral Brig Comandante de la 1ra. División FF EE" revelando éste que, los textos mecanográficos contenidos en los nueve folios, han sido dactilografiados con una máquina de escribir mecánica de 2.50 mm de escape, de tipo PICA y que no corresponde a ninguna de las 19 máquinas de escribir que tiene en la 1ra. División FF EE. De igual forma, concluye que la porción del sello circular que figura en la última página (9) del documento antes descrito, no corresponde a ninguno de los 18 sellos matrices de uso por dicha División. Finalmente, el dictámen sostiene que los formatos o encuadramientos de los textos de las 9 páginas del documento controvertido, no se ajustan a las normas que prescribe el Reglamento de Correspondencia Militar No RE-340-10 del 36 de Febrero de 1976, por lo que se llega a la conclusión de carácter general, que el documento denominado "CRONOGRAMA DE LA EXPOSICION



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

AL SEÑOR GRAL BRIG CMDTE DE LA 1RA DIV FF EE" en 9 páginas fotocopias y que fuera publicado en la edición de la Revista "Si" No. 320 del 19 al 25 de Abril de 1993; constituye un documento APOCRIFO.

5.2. Segunda visita realizada por el General Hermoza Ríos Comandante General del Ejército.

En esta oportunidad el General Hermoza Ríos manifestó que el Fuero Privativo Militar viene realizando una exhaustiva investigación sobre los mismos hechos que son objeto de investigación por esta Comisión.

Preguntado sobre el Mayor Martín Rivas, expresó que es un Oficial del Ejército que viene prestando servicios en la Dirección de Inteligencia de dicha Institución. Con relación al Coronel Obregón, dijo que éste era un excelente Oficial que estuvo a cargo de su seguridad personal cuando fue internado en el Hospital Militar.

Respecto al Doctor Vladimiro Montesinos expresó que es asesor del Servicio Nacional de Inteligencia cuyo Jefe es el Gral. Div. EP Julio Salazar Monroe y que dicho funcionario no tiene ninguna ingerencia con el Comando del Ejército ni con los asuntos propios de esta Institución, por lo que todas las especulaciones hechas con relación a sus supuestos vínculos con la Fuerza Armada carecen de veracidad, no teniendo ninguna relación funcional ni administrativa con el Ejército.

Respecto al General Robles indica el General Hermoza que este sistemáticamente ha mentido demostrando con esto su intención de agraviar a su Comando y lesionar el prestigio del Ejército.

Respondiendo a una pregunta el General Hermoza manifestó que sucesos como los de la Cantuta van contra la estrategia de Pacificación.

5.3. Visita a la Comisión Investigadora del Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y del Auditor General.

El Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Almirante Duboc refirió a la Comisión Investigadora que la labor en el caso de la Cantuta es una investigación judicial, debiéndose dejar esta así como el juzgamiento de la Justicia Militar, la que tiene una consigna de error "cero", dejó ver a la Comisión que no es conveniente para el País que ambas Instituciones investiguen, hace saber a la Comisión que por disciplina castrense son sólo los jefes los que responden no los subordinados, ya que esto sería interpretado como una falta de disciplina en la jerarquía del Ejército.



De otro lado el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar continúa haciendo una fundamentación acerca de porqué deben respetarse las instituciones y si la Justicia Militar está investigando éste caso en ella debe confiarse y tenerse plena seguridad que llegará en las investigaciones al fondo del asunto y si debe sancionar a personas lo hará sin ser dubitativas.

A este respecto el General Guido Guevara Guerra, Auditor General de la Justicia Militar manifestó que hay una fuerza en operaciones, fuerza a la que hay que defender. La Justicia Militar no es para tapar ni apañar dijo, su actuar es sancionar, tan es así que el Fuero Militar acompaña las tropas pro disciplina y por último dejó claro que no hay ningún entrapamiento ya que la Justicia Militar está investigando este caso y lo que debe hacerse es tener confianza en ella.

5.4. Visita del Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, General Julio Rolando Salazar Monroe a la Comisión:

En su exposición, el Gral. Div. EP. Julio Salazar Monroe, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, indicó a la Comisión que actualmente la dependencia bajo su Comando se rige por Decreto Ley No. 25635 del 21 de Julio de 1992, pero que en el momento en que ocurrieron los hechos materia de la investigación, el Servicio de Inteligencia Nacional regulaba su organización y funciones dentro de lo que disponía el Decreto Legislativo 271 del 10 de Febrero de 1984 el cual precisa con absoluta claridad en su artículo 2o. que "dicho organismo proporciona inteligencia Estratégica en los campos de acción no militares, requerida para el planeamiento y ejecución de la Defensa Nacional...". Dentro de este contexto legal precisó que los campos no militares son el Económico, el Político y el Sicosocial; es decir, que el Servicio de Inteligencia Nacional por mandato de la ley, no tenía ninguna responsabilidad con relación al campo de la Inteligencia Militar.

A continuación explicó que al Servicio de Inteligencia Nacional sólo le competía las funciones clásicas de la Inteligencia Estratégica, como son: producir, procesar y difundir a los más altos niveles de la Defensa Nacional, la Inteligencia Estratégica requerida para el planeamiento y ejecución de la mencionada Defensa Nacional. Que, en este entendido, jamás, ni con la ley que regía en la época en que se produjeron los sucesos de La Cantuta, ni con la que actualmente rige al Servicio de Inteligencia Nacional, ha existido ni existe en dicho Servicio elementos para hacer intervenciones u operativos de ninguna especie y mucho menos del tipo "Destacamentos Especiales", "Destacamentos de Aniquilamientos" o "Escuadrones de la Muerte", como indebidamente se menciona.

Con relación al Dr. Vladimiro Montesinos Torres funcionario



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

del Servicio de Inteligencia Nacional expresó que dicho funcionario no ha tenido ninguna participación, intervención o colaboración de cualquier tipo en los hechos que son de conocimiento de la Comisión, pues sus tareas en el Servicio de Inteligencia Nacional se circunscriben a brindar asesoramiento como Letrado a ésta Jefatura, por lo que consecuentemente resultan falsas y tendenciosas aquellas versiones que lo sindicán como Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional o que tiene facultad y mando para dar órdenes a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Asimismo, señaló que es igualmente falso y tendencioso que el Doctor Vladimiro Montesinos Torres hubiera entregado cierta cantidad de dólares a personal cuyos nombres figuran en la denuncia hecha por el General (R) Robles, pues el único responsable y autorizado para el manejo de dinero es el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, esto es el General Julio Salazar.

Sobre la felicitación que el Presidente de la República hace entre otros al Mayor Martín Rivas, el General Salazar explicó que a iniciativa del SIN, se formó un grupo de trabajo que realizó sus actividades en los Locales de la DINCOTE con el fin de elaborar un Manual sobre el accionar del grupo terrorista de Sendero Luminoso. Este equipo de trabajo estuvo integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, siendo su labor específica, analizar esta información incautada al grupo terrorista de Sendero Luminoso y elaborar un Manual que sirviera a los Institutos Armados y a los Organismos de Inteligencia para la enseñanza de cómo combatir a esta organización Terrorista; dentro de las personas que elaboró este Manual se encontraba el Mayor Rivas y otros que fueron felicitados por el Señor Presidente a solicitud del Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional por la labor realizada.

De otro lado respecto a los hechos que habrían ocurrido en la Cantuta, refirió el General que el Servicio de Inteligencia Nacional no ha recibido ninguna información en el sentido de que miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional hayan intervenido en la presunta desaparición de un profesor y varios estudiantes de dicho Centro Superior de Estudios, en todo caso quien podría tener alguna información es el Servicio de Inteligencia del Ejército, vale decir el SIE o DINTE no así el SIN ya que este Organismo en la fecha antes precisada (18 de Julio de 1992) de acuerdo a su Ley Orgánica sólo producía Inteligencia Estratégica para el Señor Presidente de la República y altos Organismos del Sistema de Defensa Nacional.

Finalmente manifestó que hay situaciones que se están dando actualmente en las que desaparecidos aparecen, el mejor ejemplo de esto son los arrepentidos, recuerda el General que hace pocos



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

días una persona lloraba la muerte de su hermano que hacía años lo tenían por desaparecido y había caído víctima de su propia bomba al explotarle a él en su intento de atentar contra la propiedad pública.

6. Declaración del Jefe y el Ex-Jefe de la DINCOTE

6.1. El Gral PNP Dominguez, manifestó que el día de los sucesos él todavía no estaba a cargo de la Jefatura de la DINCOTE, cargo que recién ocupa desde Enero del año 1993.

Sin embargo, ha pedido información al respecto, pudiendo decir a la Comisión ahora que la DINCOTE no ha participado en el operativo conducente a la desaparición de los estudiantes y el profesor.

Que de las diez personas desaparecidas, seis tienen referencias de terrorismo, ya que ellos no colocan antecedentes pues su labor es sólo de investigar, siendo el Poder Judicial el único que ordena colocar antecedentes a una persona, lo que ellos tienen son unas fichas de referencia con las investigaciones que realizan, y como ya han dicho, seis de los diez tienen confeccionada esta ficha de referencia, lo que figura en un documento que presenta a la Comisión.

Respecto al profesor Hugo Muñoz, manifestó que tiene conocimiento que en su contra hay una Orden de captura por terrorismo, no habiendo actuado al respecto la DINCOTE por ser competencia de la Policía Judicial. Siendo esto lo más saltante de lo declarado por el General Dominguez de la PNP.

6.2. Visita a la Comisión del General Ketin Vidal

El General PNP Ketin Vidal, ahora Inspector General de la PNP refiere que cuando estuvo a cargo de la DINCOTE no se hizo seguimientos al interior de La Cantuta, no pudiendo descartarse que los hechos hayan sido un secuestro de Sendero Luminoso, no conoce ningún caso que las Fuerzas Armadas hayan actuado de esa forma, puede igualmente asegurar que ese día no hubo ningún miembro de la DINCOTE en la UNE La Cantuta, de otro lado, tratando de dar una explicación a lo ocurrido, manifiesta que no tiene mucho sentido pues no eran importantes en la organización de Sendero Luminoso, si bien seis de los desaparecidos tienen referencias por actividades senderistas o por lo menos han sido intervenidos y dejados en libertad por falta de pruebas, el profesor Muñoz no figura en el Comité Central de Sendero Luminoso, no tiene conocimiento de que haya tenido un alto nivel en Sendero.

Sobre las actuaciones de supuestos grupos para-militares sólo tiene conocimiento de la matanza realizada en el Jr. Huanta



en Barrios Altos, después no tiene mayor información.

No recuerda el nombre de Nilda Anastasio, referente al escuadrón Delta 5 refiere el General que el escuadrón mencionado es al que territorialmente le corresponde la zona de la carretera central Chosica, La Cantuta, para trabajar mejor está dividido geográficamente el trabajo en la Dincote, correspondiendo el área ya mencionada al delta 5.

Dentro de la política de trabajo de la Dincote es interrelacionarse con todos los órganos de inteligencia nacional intercambiando informaciones, pero nunca realizando operativos.

Preguntado para que dé su opinión sobre lo ocurrido en la Cantuta manifestó que al haber estudiado Inteligencia lo obliga a ser objetivo no pudiendo ir a las suposiciones.

7. Declaración de Autoridades de la UNE La Cantuta

Antes de ir a las declaraciones de los Rectores de la UNE La Cantuta, debe anotarse que el día 16 de Julio de 1992, se realizó una Asamblea Universitaria en la UNE La Cantuta, convocada por el Rector Ramos Geldres, Asamblea, que no tuvo el quorum necesario para instalarse y tomar acuerdos válidos, pero aún así, habiendo sido disuelta por el Rector Ramos, esta Asamblea sesionó destituyendo a la mencionada persona y nombrando como encargado del Rectorado al profesor Laynes, ex Decano de la Facultad Agropecuaria, por ser el profesor más antiguo, quedando sin Vice Rector ni Consejo Directivo la Universidad, el día de los hechos 18, de Julio la situación para el destituido Rector Ramos, era de no poder ingresar a las oficinas del Rectorado por estar cuidada por personal a órdenes del Rector encargado Laynes; en un Proceso Penal en el 90. Juzgado Penal de Lima, el Rector Ramos consigue su reposición como tal en la UNE La Cantuta con fecha posterior al día de los hechos.

7.1. Declaraciones del Rector Ramos Geldres.

Manifiesta el mencionado Rector que los hechos se producen cuando había una ruptura de la legalidad en el Gobierno de la Institución. El día de los hechos él no se encontraba en la Universidad, un grupo de estudiantes le envía un oficio señalando nombres y circunstancias de lo ocurrido, narraron como fue: Apuntaron con armas cortas, alumbrándoles las caras con linternas; este Oficio se lo entregó al Secretario General Walter Hernandez que vive en la UNE La Cantuta, posteriormente los familiares de los desaparecidos se organizan.

Manifiesta el Sr. Ramos que ninguno de los desaparecidos era miembro de la Asamblea Universitaria, ni del Consejo Universitario de la Facultad, eran gente de base y estaban en



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

posición contraria al tercio estudiantil de la Asamblea Universitaria.

El profesor Muñoz era Jefe del Departamento Académico de Ciencias Aplicadas a la Educación de la Facultad de Pedagogía, no era ni dirigente del gremio ni miembro de la Asamblea.

Informando sobre la relación Ejército-Rectorado, manifestó que no había relación alguna, no conociendo quién era el Jefe, pues lo cambiaban cada quincena o mes.

Manifiesta el rector que es poco probable que no se hayan percatado las fuerzas acantonadas de lo ocurrido, haciendo notar también que hay dos puertas de acceso, una por la residencia de docentes, y otra, la puerta principal, sin embargo hay un acceso por el pozo de agua por los cerros de atrás.

7.2. Declaración del Rector Laynes

Manifiesta este Rector que la Universidad era un caos cuando estaba en manos del Rector Ramos, por eso la Asamblea acuerda destituirlo nombrándolo a él por ser el profesor más antiguo.

Respecto de los hechos ocurridos, manifiesta que no se enteró sino hasta el otro día, que él vive a dos cuadras del profesor Muñoz y mucho más lejos de los estudiantes.

Expresa que por la parte de atrás ingresan personas extrañas a la Universidad y que incluso se roban cosas, tales como máquina de escribir, conejos y otros animales; antes de que esto aconteciera, la Unidad del Ejército en la UNE La Cantuta era mucho más fácil entrar y salir por detrás, ahora es un poco más difícil pero igual se puede, incluso es posible que los hayan sacado por la parte de atrás sin que se den cuenta los militares que custodian la UNE La Cantuta.

7.3. Testimonio del Director de Bienestar Universitario de la UNE Enrique Guzmán y Valle, Sr. Luis Silva Aguilar.

El mencionado es Profesor de Educación Física y desde el mes de Abril de 1992 fue nombrado Director de Bienestar Universitario, no obstante los conflictos mantenidos con el Rector Sr. Laynes, considera que se mantiene en dicho puesto por su capacidad.

La noche de los hechos pernoctó, en la vivienda E 7 cuyo conductor es el Docente Sr. Walter Hernandez Alcántara la misma que está ubicada al frente y a escasos metros de la casa habitación del Profesor Muñoz (E-8), sin embargo manifiesta que esa noche no sintió ruidos de ningún tipo.

Habiendo tomado conocimiento de los hechos horas después por información de dos estudiantes del Pabellón de mujeres.



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

Refirió, que la prohibición de tránsito en el interior de la Universidad, después de las 22.00 horas era una Disposición suya dada en el Reglamento del Internado tanto de varones como de damas, dicho Reglamento elaborado por él indica que nadie debe salir después de las diez de la noche de las residencias así como tampoco nadie puede ingresar a las residencias después de esa hora, inclusive refirió que por no acatar esa disposición ya ha sacado a dos chicos del internado.

Como Jefe de Bienestar Universitario manifestó que su labor es dar Alimentación, Vivienda y Medicinas a los estudiantes.

Precisado en lo referente al horario de Ingreso y Salida de las Residencias, dijo que el Ejército no tiene nada que ver con este horario y que como ya lo ha manifestado es puesto por él.

Manifestó conocer a algunos de los desaparecidos y la hora por ser deportista y miembro del equipo de fútbol de la Universidad, igualmente conoce a algunos de los desaparecidos puesto que jugaban fútbol y como él estaba a cargo de las canchas así los conoce.

8. Declaración de Testigos

8.1. Declaración de Luz María de Paz Sepúlveda de Mejía.

La deponente es profesora del Colegio de La Cantuta y de la Facultad Textil en la UNE La Cantuta, la noche de los hechos, ella se encontraba en su residencia que es la casa No. 14, la del profesor Muñoz es la No. 11, sintió ruido en la noche y salió pensando que eran sus hijos que regresaban y vió al profesor Hugo Muñoz amordazado y con un trapo negro en la cabeza, sin zapatos, el torso desnudo, sólo con pantalón, que era conducido a viva fuerza por un grupo de civiles que tenían armas con silenciador, vestían prendas de color oscuro, pelo corto como militar, como pasamontañas, liderados por uno más bajito que era el que les decía que cosa debían hacer, al preguntar por sus hijos, le dijeron que regrese a su casa y no salga, dejando a dos cachaquitos cuidando la puerta, los que sí estaban vestidos de militares.

Manifestó también haber sido amiga del profesor Muñoz, el cual según dijo era un hombre que hacía mucha labor social en la Universidad, conseguía cosas para los más necesitados y se llevaba bien con todo el mundo en la Universidad.

8.2 Declaración tomada por la Comisión Investigadora a la Señora Antonia Pérez Vélasquez

En su manifestación la Señora Antonia Pérez Vélasquez, esposa del profesor Hugo Muñoz, afirmó que son Militares los que se llevaron a su esposo por lo siguiente :

- Por su contextura física



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

- Porque portaban armas
- Porque estaban encapuchados, tenían chompas negras de cuello alto, chaqueta de colores.

De otro lado comenta que su esposo ha sido siempre enérgico en repudiar a Sendero Luminoso, rechazando siempre los actos que dicho movimiento realizaba.

De otro lado, respecto a los problemas de las autoridades en la Cantuta su esposo no estaba de acuerdo con el Rector Ramos Geldres, el día de la Asamblea (16 de Julio), no ha permitido el atropello por los Militares que quisieron intervenir en cosas de la Universidad.

Relatando lo sucedido el día de los hechos y precisadas algunas respuestas por los Congresistas la Sra. Antonia Pérez Velásquez, indicó que luego de habérsele colocado la capucha no se le podía ver la cara, si la vecina lo ha conocido es porque eran muy amigos, lo que no se podía ver era la mordaza por haber quedado bajo la capucha.

Preguntada por si conoce a Nilda Anastasio, la deponente manifestó haber sido la primera esposa de Hugo Muñoz, que la había conocido muy poco y sabe que actualmente se encuentra fuera del País.

8.3. Declaraciones de los Srs. (2) (3) (4) (5) y (1) y Srta. recibidas en el Seno de la Comisión, el Jueves 06 de mayo de 1993.

Los mencionados, son Alumnos Internos de dicha Universidad quienes manifestaron: Que la madrugada del 18 de julio de 1992 a las 02.00 a.m., un grupo de personas encapuchadas y en forma violenta ingresaron por la puerta trasera (posterior), ordenándoles arrojar al suelo, boca abajo, luego los hicieron salir al jardín, sugiriéndoles sus nombres y previa verificación con una lista, separaron a 7 de sus compañeros, a quienes los condujeron con ropa interior, el resto del grupo regresó a sus habitaciones atándolos boca abajo con sus medias. Escuchándose gritos de dolor de los estudiantes presuntamente desaparecidos. Asimismo, las personas que ingresaron se llevaron dinero y herramientas.

Señalaron que ese día habían realizado una Fiesta de Confraternidad y Camaradería, la misma que estaba autorizada por el Director de Bienestar Universitario, a quien también se informó de los hechos ocurridos.

9. Visita de la Comisión

El sábado 17 de Abril de 1993 la Comisión Investigadora se constituyó a la Sede de la UNE La Cantuta, obteniendo las siguientes declaraciones:

- Declaración del estudiante José Bellota Rayne: Se le solicitó que narre lo ocurrido el día de los hechos,



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

manifestando que, el 18 de julio de 1992 un Grupo de Militares del Ejército ingresaron por la puerta que estuvo clausurada y lo derribaron de un patadón, manifesto' que los golpearon y tiraron al suelo boca abajo, ingresaron alrededor de 30 personas, afuera había gente y tres autos uno rojo doble cabina y dos azules con lunas polarizadas, uno a uno nos alumbraron con una linterna para que diéramos nuestro nombre y a la persona que tenían en la lista lo separaban y a quién lo pateaban se quedaba adentro, los que quedaron fuera, fueron 7 varones, manifestando también que hay un toque de queda a las 10 de la noche y nadie puede transitar. Llegada la Comisión al Pabellón de Alumnas se encontraron a las siguientes :

Mary Cubas
Beatriz Angélica Hinostroza
Francisca Solís
Leonor Azurín

- Declaró Francisca Solís: Siendo aproximadamente las 4 de la mañana el 18 de Julio de 1992 entraron los encapuchados y revisaron nuestro cuarto se llevaron a tres chicas y regresó Norma, la que les contó que subió a un camión porta tropa y luego la regresaron.
- Angelica Hinostroza: preguntada sobre si fué personal Militar indica que estuvieron personas de Civil y Uniformados con metralletas, los que tenían una lista, habían aproximadamente 100 efectivos, existiendo pleitos entre los alumnos y las Autoridades.
- Declaración Anónima: Indica esta persona que ella si fué testigo de todo lo que ocurrió, narrando que a la 1.30 de la mañana del día 18 de Julio último cuando dormíamos, comenzaron ruidos y habían golpes en las puertas, entró un hombre robusto alto, encapuchado con botas es el famoso Medina, lo que puedo asegurar ya que este era un hombre alto gordo, colorado y parecía un psicópata, comenta esta persona que las desaparecidas eran chicas muy preocupadas por el problema de la Universidad. Luego la Comisión llega a la Residencia de Profesores : Son recibidos por el Profesor Octavio Mejía y Antonia Pérez Velásquez.
Declara Antonia Pérez Velasquez: El sábado 18 de Julio de 1992, ingresó un grupo de Militares y destruyeron la puerta, al escuchar golpes mi esposo salió (Hugo Muñoz), y lo cogieron 3 sujetos altos fornidos con botas y buzo lo llenaron de palabras soeces y se lo llevaron sin zapatos, un cuarto sujeto ingresó con una filmadora aseguró que eran militares por sus chompas color negro,



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

cuello alto, pasamontañas, chaquetas de colores, manifiesta que la tuvieron bajo custodia hasta las 3.30 de la mañana.

- Declaración de Octavio Mejía: Días antes manifiesta, que tuvieron una Asamblea Universitaria por el lío de los Rectores a las 1.30 sentimos pasos, vimos un grupo de personas civiles ingresar a la Residencia y llevarse al Profesor Muñoz, sin zapatos, con pantalón y el torso desnudo. Respecto al problema de los Rectores y los Alumnos manifiesta que había una mayoría de Alumnos que apoyaban al Profesor Laynes y la minoría al Sr. Ramos.

10. Visita de la Comisión a Buenos Aires - Argentina.

10.1 Entrevista con el Gral. (R) Rodolfo Robles Espinoza.

La Comisión Especial Investigadora de los sucesos de la UNE - Cantuta, al tomar conocimiento a través de los medios de comunicación que el Gral (R) Rodolfo Robles Espinoza se encontraba en la ciudad de Buenos Aires - Argentina, en donde públicamente había ofrecido presentar las pruebas que sustenten su denuncia hecha en un documento manuscrito de nueve folios, sobre la supuesta participación de miembros del Ejército en la desaparición de un profesor y varios estudiantes de la UNE Enrique Guzmán y Valle, con la autorización del Pleno viajó a la ciudad de Buenos Aires y entrevistó al mencionado General, el mismo que al ser requerido para que ponga en manos de la Comisión las pruebas que decía tener, se negó a hacerlo bajo el deleznable argumento de que no quería comprometer la integridad y la vida de diversos Oficiales del Ejército que le habían proporcionado dichas pruebas. Por lo que puede afirmarse que el viaje fué infructuoso y la entrevista con el Gral (R) Robles no significó ningún aporte al esclarecimiento de los hechos.

11. Documentos enviados a la Comisión

- 11.1. Documentos entregados a la Comisión por los familiares. Los familiares hacen entrega a la Comisión de documentos relativos a las acciones de Habeas Corpus seguidos ante el Poder Judicial, los mismos que han sido tratados en el punto 1. De este informe pues, están incluidos en los documentos que remitiera el Poder Judicial a la Comisión.
- 11.2. Documentos que llegan en forma anónima a la comisión.

Documento apócrifo de nueve páginas titulado "Cronograma de la Exposición al Señor General de Brigada, Comandante de la Primera División FFEE", la Comisión no ha dado valor probatorio a este documento, el mismo que guarda



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

relación con la pericia presentada por el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde se concluye que no ha sido elaborado en las oficinas de las Fuerzas Especiales del Ejército.

11.3. Documentos que presentan a la Comisión otros Congresistas

El Dr. Henry Pease lleva a la Comisión Investigadora el documento denominado "CAPTURA Y EJECUCION EXTRAJUDICIAL DE UN PROFESOR Y DIEZ ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ENRIQUE GUZMAN Y VALLE - LA CANTUTA" que lleva el logo de "COMACA", el cual es recibido y tenido como hipótesis de trabajo, sin valor probatorio alguno, dado su carácter de anónimo, ya que el Congresista Pease dice que el no se responsabiliza por lo expresado en dicho documento habiendolo recibido en forma anónima, al haber sido dejado en su curul el día que se presentaba la Moción del Sr. Cuaresma y del Sr. Olivera.

12. Visita de Instituciones Extranjeras en la Comisión Especial

Representantes de ONG extranjeras, como America's Watch y representantes de las Iglesias Misioneras Extranjeras, preocupados por la situación de los desaparecidos en nuestro País, visitan la Comisión y expresan la importancia del trabajo que ésta realiza, manifestando su preocupación por los desplazados en nuestro País por causa de violencia, esto es, las personas que deben dejar sus tierras para irse a otras, obligados por las circunstancias de violencia que están sucediendo en estos lugares.

13. Valoración de la Prueba

13.1. Aspecto Subjetivo

En la Moción de Orden del Día presentada por el Sr. Cuaresma y el Sr. Olivera se presume que haya sido el Ejército quien cometió los hechos. La presunción según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es "sospechar, juzgar o conjeturar una cosa por tener señales para ello", osea, que es una apreciación subjetiva, por la carencia de pruebas, vale decir una hipótesis para iniciar un trabajo ó investigación la que necesita de indicios razonables que hagan la presunción a una concepción y conocimiento más veráz de los hechos, tal como sugiere el tratadista argentino Vélez Mariconde, pudiendo también no obtenerse estos indicios razonables, al no ser fortalecida por tales, la presunción carecería de sustento para deducir que el hecho investigado se haya



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

producido de esa forma.

13.2. Aspecto Legal

El Artículo 20. Inciso 20, Párrafo f de la Constitución Política del Perú establece que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

El Art. 221 de la Constitución determina las responsabilidades de los Ministros; no encontrándose los hechos materia de investigación, como posibles causas que imputen responsabilidades.

El Artículo 77 del Código de Procedimientos Penales establece que para abrir Instrucción se requiere:

1. Que el hecho investigado constituya Delito
2. Que se haya individualizado al presunto autor
3. Que no haya prescrito la acción penal.

13.3. Fase crítica

Esta fase consiste en el análisis de los elementos reunidos durante la investigación, para llegar a la conclusión que corresponda, es importante resaltar que la finalidad de la investigación es alcanzar la verdad concreta, siendo verdad concreta, el conocimiento del hecho en todos sus perfiles y detalles hasta lograr la individualización de sus autores. Constituye este hecho, fundamento gnoseológico de la investigación.

- 13.3.1 Mediante la constatación de los testimonios recibidos por el Poder Judicial y analizados en este Informe en los numerales 1.1.1. 1.1.3. así como por los testimonios recibidos por la Comisión, analizados en este Informe en el punto 8., podemos colegir que:

No hay una certeza sobre la vestimenta usada por los que sustrajeron el profesor Muñoz, ya que Luz María Paz Sepúlveda de Mejía menciona vestidos de civiles y Antonia Pérez Velasquez menciona que presume hayan sido militares, debe hacerse notar que en las últimas investigaciones a grupos terroristas se han encontrado uniformes militares y pasamontañas entre los objetos que dichos grupos usan para cometer sus delitos, lo único que se tiene en cuenta para la presunción de que sean militares, es el porte atlético de las personas, aseveración que no constituye un indicio razonable para deducir que sí fueron militares, pues con tal criterio todas las personas de porte atlético se presumirían como militares y todas las personas que carezcan de porte



atlético no podrían ser militares; todo lo cual es un absurdo.

13.3.2 En relación al documento que lleva el título de "CAPTURA Y EJECUCIÓN EXTRA-JUDICIAL DE UN PROFESOR Y DIEZ ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ENRIQUE GUZMAN Y VALLE - LA CANTUTA", de tres folio que lleva el logo de COMACA entregado por el congresista Henry Pease y el documento apócrifo que nueve (09) folios titulado "CRONOGRAMA DE LA EXPOSICION AL SEÑOR GRAL. BRIG. COMANDANTE DE LA PRIMERA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES" que tiene la calidad de anónimo, la Comisión ha desestimado su valor probatorio al no consignar el autor y responsables de los mismos. Sin perjuicio de ello, se efectuaron acciones tendientes a comprobar la veracidad de las denuncias ahí vertidas, descartándose su autenticidad según el resultado de la Pericia de Grafotecnía No. 979/93 de 20 de Abril de 1993 presentada a la Comisión por el Señor Comandante General del Ejército, en cuya conclusiones, como ya se ha precisado, se dice que "los textos mecanográficos contenidos en las nueve páginas del documento antes aludido, han sido dactilografiados con una misma máquina de escribir mecánica de 2.50 mm. de escape, correspondiendo a una de tipo PICA", la misma que no corresponde a ninguna de las 19 máquinas con que cuenta la Primera División de Fuerzas Especiales. De igual forma, se concluye que la porción impresa del sello circular que figura en la última página del aludido documento, no procede de ninguno de los 18 sellos matrices que existen en la Primera División de Fuerzas Especiales, llegando a la conclusión de carácter general, que el documento denominado "CRONOGRAMA DE LA EXPOSICION AL SEÑOR GENERAL DE BRIGADA COMANDANTE DE LA PRIMERA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES", en nueve fotocopias, constituye un documento APOCRIFO.

13.3.3. Con relación a la denuncia que hiciera el General (R) Rodolfo Robles Espinoza a través de los medios de comunicación en un documento titulado "DENUNCIA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS POR EL SIN Y POR EL CGE" respecto a la existencia de una monstruosa maquinaria asesina, señalando minuciosamente nombres y grados de los militares que los sindicaba como los responsables de la intervención y desaparición de los nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad de La Cantuta, ha quedado indubitadamente demostrado que ésta no responde a la verdad y que carece de todo sustento por lo siguiente:

a. El 15 de Mayo de 1993, el Gral. de Brig. EP José Picón Alcalde, en una entrevista exclusiva para



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

el Programa de 24 Horas Panamericana Televisión, desmintió categóricamente haber tenido ninguna reunión ni conversación con el Gral. Robles para tratar los asuntos de su denuncia y que mas bien por el contrario durante los meses de Febrero y Marzo de 1993, es decir meses antes de que hiciera esta denuncia, el Gral. Robles le manifestó al Gral. Picón que había que "tratar de incriminar en alguna denuncia al Dr. Montesinos para que se produzca un escándalo", pues según expresaba, el Dr. Montesinos era un obstáculo para que él, el Gral. (R) Robles, ocupe el cargo de Comandante General del Ejército, apreciándose una ambición personalista y que lo descalifica moralmente.

- b. El 18 de mayo de 1993, la Comisión Especial Investigadora del Congreso Constituyente Democrático sobre los sucesos de La Cantuta, luego de viajar a la ciudad de Buenos Aires, se entrevistó con el Gral. (R) Rodolfo Robles Espinoza, quien ofreció públicamente entregar las pruebas que sustente su denuncia. Al ser requerido por la Comisión para que presente las pruebas con que decía contar, no entregó prueba instrumental alguna, y solo se limitó a ratificarse en su denuncia pública del 05 de Mayo, precisando de que el Ejército como Institución no tuvo participación en la detención de los desaparecidos, resultado totalmente infructuoso el viaje expreso de la Comisión.
- c. Pocos días después de no entregar dichas pruebas a la Comisión, el señor Robles hace público, un documento manuscrito y firmado, supuestamente por el General Willy Chirinos, sindicándolo como quien habría sido el informante y testigo clave de la denuncia, originando dicho hecho que se emitiera el dictámen pericial de grafotecnia No 1260/93 donde se demuestra técnicamente que el General Robles ha faltado a la verdad, pues el manuscrito materia de la pericia grafotécnica, no ha sido suscrito por el Gral. Brig EP Willy Chirinos Chirinos, toda vez que no proviene de su puño gráfico sino que ha sido escrito por tercera persona cuya identidad se desconoce; hecho que fué corroborado luego por las declaraciones presentadas por el General Willy Chirinos a los medios de Prensa. Por todo lo cual, queda en claro que el citado ciudadano Rodolfo Robles es un mitómano consuetudinario o ha actuado llevado simplemente por el ánimo negativo de hacer daño a su ex-institución y a sus mandos naturales.
- d. Finalmente, el mismo Gral. de Brig. EP Willy Chirinos



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

Chirinos, se encargó personalmente de desvirtuar las infamantes declaraciones del Gral. (R) Robles, en el sentido de que dicho Oficial General hubiera sido su fuente de información, pues así se desprende del texto de la declaración publicada por diversos medios de comunicación el 27 de Mayo último a solicitud del Gral. Chirinos Chirinos frente a las "versiones falsas y calumniosas" del Gral. Robles respecto a su persona, por lo que se ha visto en la "imperiosa necesidad de manifestar a la opinión pública que en ningún momento le ha expresado al citado Gral. (R) los hechos y circunstancias que ahora malévolamente sostiene sea yo quien se lo haya proporcionado".

De otro lado, en una entrevista concedida por el Gral. Chirinos a el diario "El Comercio" el 28 de Mayo de 1993, vuelve a desmentir tajantemente las versiones del Gral. Robles, toda vez que "cuando estuve en la DINTE, de haber tenido conocimiento de hechos delictivos sobre violaciones de Derechos Humanos, hubiera sido el primero en denunciarlo ante el Comando y los organismos correspondientes...".

En conclusión, se puede sostener que el Gral. (R) Robles, no solo ha faltado a la verdad sino que irresponsablemente hace aseveraciones sin fundamento y sin importancia la honra y reputación de sus camaradas de armas, llegando al extremo de exhibir documentos fraguados, como si fueran verdaderos, a sabiendas que son falsos.

13.3.4 Si bien es cierto que la UNE "Enrique Guzmán y Valle" se encuentra bajo control Militar y existen normas internas emanadas por la Dirección de Bienestar Universitaria de dicha casa de estudios (Sr. Juan Silva) que restringe el libre tránsito de las personas en el interior de las misma a partir de las 22.00 hrs., los hechos materia de investigación deben asimismo constatarse y confrontarse con las declaraciones formuladas por los Rectores y Directores de Bienestar Universitario, aspectos que nos llevan a denunciar que existe la posibilidad que la sustracción de dichas personas hayan sido cometidas por personas ajenas a las FFAA y PNP.

13.3.5 Mediante los documentos tratados en todo el punto 2. De este Informe, en especial el analizado en el punto 2.1.1. coadyuvado por la declaración dada a la comisión por el General Dominguez (Jefe de la DINCOTE).

Analizada en el punto 6. de este Informe, y convalidada por



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

la declaración formulada por el General Ketin Vidal Jefe de la DINCOTE en la fecha de los hechos materia de investigación; puede aseverarse que: El profesor Muñoz Sanchez estaba involucrado en actividades terroristas, teniendo incluso una Orden de Captura contra su persona dictada por un Juez competente.

Bertila ó Bertina Lozano Torres realiza actividades pro Sendero Luminoso, Robert Edgard Teodoro Espinoza, Marcelino Máximo Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana y Armando Amaro Cóndor han sido por lo menos detenidos é investigados por DINCOTE por actividades terroristas.

Queda establecido a mérito de los numerales 1,2,4,5,6 y siguientes que:

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Segunda Región Militar, la Séptima Región de la Policía Nacional Peruana y ningún otro Instituto Armado impartieron instrucciones y órdenes para realizar alguna intervención, operativo o rastillaje el 18 de Julio de 1992 en la UNE La Cantuta.

Queda claro que los testimonios de quienes dicen haber presenciado los hechos no crean convicción de veraces pues debe aquí precisarse que quienes los dan son la esposa del profesor desaparecido, la enamorada de uno de los desaparecidos que a su vez es compañera de cuarto de Bertila Lozano y Dora Oyague, no siendo por lo tanto testigos idóneos, igualmente debe notarse una excesiva exactitud entre lo declarado por Antonia Pérez Vasquez y Luz María de Paz Sepúlveda, como por ejemplo, dada la oscuridad de la noche, la segunda de las nombradas dice que, pudo distinguir claramente que se trataba del profesor Muñoz, el que estaba sin zapatos y con el torso desnudo, sin embargo, no puede describir claramente el armamento que llevaban los que custodiaban su casa, de los que si estuvo a menos de un metro, también debe hacerse anotar, que la única que pudo saber de la mordaza que llevaba el profesor bajo el trapo que le cubría la cabeza podría ser lógicamente, la esposa, pues ella dice haber visto cuando le colocaban dicha mordaza, siendo ilógico y materialmente imposible que la testigo Luz Maria de Paz Sepúlveda pudiera ver la mordaza estando encapuchado el profesor y encontrándose dicha testigo a unos quince metros de distancia. Mas aún con lo manifestado por el Director de Bienestar Universitario quien pernoctó esa noche en la habitación No E 8, la misma que se encuentra a escasos metros y al frente de la vivienda asignada al profesor Muñoz; dicha manifestación se centra en afirmar no haber escuchado u observado absolutamente nada.

A Lo que se añade que la esposa del profesor Muñoz afirma que la intervención se produjo a la 1.30 de la madrugada y permaneció encerrada en su dormitorio hasta las 3.30 a.m., por lo que es imposible que pudiera ver, como afirma, que simultáneamente ingresaron al internado y "se llevaron" a varones jóvenes y



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO
señoritas.

En conclusión, en dichas manifestaciones existen aspectos contradictorios: (ninguna persona en posición de cúbito ventral; y encontrándose en el pasillo de la residencia, y con la vigilancia a escasos metros, que imposibilita el levantar de la cabeza) "puede afirmar y sobre todo diferenciar los tipos de vehículos, color de éstos, y sus accesorios (lunas polarizadas), de lo que se determina que éstos testimonios no guardan relación lógica coherente, con los supuestos hechos que pudieron haber apreciado; al agregar detalles que fueron imposibles de verificar, lo que distorsiona la verdad. Todo lo cual parece indicar que ha existido un previo concierto de voluntades entre los "testigos" para proporcionar versiones similares.

14. CONCLUSIONES GENERALES

- 14.1 Se ha llegado a establecer que, cualquiera que fueran las circunstancias, situaciones o motivos, no ha sido posible ubicar al catedrático Hugo Muñoz Sanchez y a los nueve alumnos de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta, por lo que corresponde al Órgano Jurisdiccional, realizar las investigaciones orientadas a precisar el paradero de las citadas personas.
- 14.2 Se ha llegado a establecer que los únicos elementos de juicio materiales con que ha contado la Comisión, han sido un documento anónimo presentado por el Congresista Henry Pease y una declaración hecha pública por el Gral (R) Rodolfo Robles Espinoza, en la que repite las imputaciones del anterior documento apócrifo pero sin aportar prueba alguna que sustente su dicho.
- 14.3 Además de estos dos elementos, la Comisión ha podido contar con las declaraciones de testigos (alumnos, profesores y familiares residentes en La Cantuta) las mismas que por las contradicciones e imprecisiones que contienen, no han permitido llegar a un conocimiento cabal de lo que pudo haber sucedido.
- 14.4 Se ha contado asimismo con las declaraciones prestadas por el Comandante General del Ejército y el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, habiendo negado el primero que en la fecha de la presunta desaparición del catedrático y los estudiantes, su Comando y los escalones operativos de su Institución no dispusieron y/o realizaron detenciones o acciones de rastillaje en La Cantuta; en cuanto al segundo, señala que su Organismo, por la naturaleza de las funciones que le señalaba la Ley en aquella época, sólo producía Inteligencia Estratégica en el Campo no Militar y no efectuaba operaciones de ningún tipo.



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

14.5 No obstante las declaraciones de ambos jefes, existiendo el hecho real y concreto de no haberse logrado ubicar al profesor Hugo Muñoz y los nueve estudiantes, no deben descartarse varias posibilidades :

- a. Que un grupo paramilitar haya intervenido
- b. Que un grupo terrorista, de ideología distinta, sea el responsable de la desaparición de estas personas.
- c. Que elementos de la misma tendencia, hayan saldado sus discrepancias internas, procediendo a "desaparecer" a estas personas.
- d. Que tanto el profesor Hugo Muñoz como los nueve alumnos, hayan decidido pasar a la clandestinidad, sea por sus simpatías con grupos violentos, sea por que estaban amenazados por éstos.

Sea como fuere, lo concreto es que la Comisión no ha tenido a la mano elementos de juicio válidos que permitan dar consistencia y credibilidad a cualquiera de estas posibilidades u otras que pudieran darse; razón por la que no está en capacidad de emitir un pronunciamiento determinando responsabilidades.

14.6 Al lado de lo señalado, se puede afirmar sin la menor duda, que no le corresponde responsabilidad alguna al Ejército como Institución en los hechos investigados, por las siguientes razones:

- a. Porque, justamente para proteger la vida y tranquilidad de profesores, alumnos y familiares, tenía acantonado un pequeño destacamento en la UNE.
- b. Porque, en aplicación de la Estrategia de Pacificación, las Fuerzas Armadas vienen actuando dentro del más absoluto respeto a los Derechos Humanos. Si no fuera así, los numerosos cabecillas de grupos terroristas, no estarían ahora detenidos, en buen estado de salud y condenados a través de un juicio justo e imparcial.
- c. Porque, la noche de los sucesos, no se produjo ningún desplazamiento de personal militar a la UNE para realizar algún operativo.

14.7 Actualmente el Fuero Privativo Militar viene conduciendo un proceso para investigar los hechos e individualizar a los presuntos responsables, a efecto de imponer las sanciones penales a que hubiere lugar; consecuentemente, al estar en



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

pleno trámite la instrucción nadie puede avocarse al conocimiento de esa causa pendiente ni interferir el ejercicio de la función jurisdiccional militar. Por tanto mientras continúe la investigación judicial referida, dicho Fuero está impedido por mandato de la Ley de proporcionar, a persona ajena al proceso, información de cualquier naturaleza vinculada al caso que instruye por la reserva que tiene la instrucción de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Justicia Militar, que es norma de orden público y por ende de ineludible cumplimiento.

14.8 Debe tenerse en consideración que la Justicia Militar es autónoma y en el ejercicio de sus funciones sus miembros no dependen de ninguna autoridad administrativa, sino de los Organismos Judiciales de mayor jerarquía. Por tanto, presumir que sus integrantes están sujetos a la influencia o subordinación de sus superiores militares, carece de sustento y cuestiona la majestad de un poder del Estado; mas aún cuando los Magistrados Judiciales Militares constituyen un cuerpo colegiado y por imperio del Código de Justicia Militar se consideran Superiores Jerárquicos de cualquier miembro de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Señalar lo contrario, implica infringir la Ley.

14.9 Consecuentemente, esta Comisión solo puede emitir conclusiones de naturaleza política, las mismas que por el ámbito en el que se desenvuelven, pueden ser aceptadas, discutidas o cuestionadas políticamente, dentro del libre juego democrático. Pues el señalamiento de la responsabilidad penal es competencia única y exclusiva del Poder Judicial y en este caso específico del Fuero Privativo Militar, previo proceso en el cual se demuestre la culpabilidad de los encausados.

14.10 En tal sentido, a esta Comisión no le corresponde establecer responsabilidades de carácter penal, bajo riesgo de incurrir en usurpación de funciones. Tanto más que, constitucionalmente, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

Por ello, el señalar la presunción de responsabilidad penal a priori, sin que haya habido un proceso penal previo dentro del fuero correspondiente, es incurrir en un exceso, que le quita seriedad al trabajo de la Comisión.

15. CONCLUSIONES ESPECIFICAS

15.1 Se ha llegado a establecer que toda acción u operativo que realiza el Ejército y la Policía Nacional, se hace como



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

consecuencia de planes y de órdenes previamente impartidos a los escalones subordinados correspondientes. De acuerdo a las pruebas testimoniales e instrumentales recabadas por la Comisión, no existe elemento probatorio alguno que acredite que las Fuerzas del Orden y en particular el Ejército o la Policía Nacional hayan efectuado algún tipo de intervención, operativo o rastillaje en la UNE La Cantuta el día 18 de Julio de 1992, por lo que actuando con un criterio de absoluta imparcialidad no es posible sostener que hayan sido las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional las que incursionaron en el referido Centro Superior de estudios el citado día y sustraído a las personas motivo de la investigación. En todo lugar, es al Fuero Privativo Militar que investiga jurisdiccionalmente los hechos, a quien corresponde identificar e individualizar a los responsables, precisar si son civiles ó militares y aplicarles la sanción penal si fuere el caso.

15.2 de lo expuesto en la conclusión precedente, ha quedado plenamente demostrado que el Ejército Peruano como Institución, no tiene ninguna responsabilidad en los hechos materia de la investigación. Consecuentemente, el Comandante General, mando natural de la Institución tampoco tiene responsabilidad alguna en los hechos investigados por la Comisión.

15.3 Está igualmente comprobado que, el Servicio de Inteligencia Nacional, por mandato de la Ley que lo regía en la época de los sucesos (Decreto Legislativo 271), por su organización y por las funciones que le son propias, tampoco ha tenido ninguna participación en los hechos investigados. Hay que puntualizar que el Decreto Ley 25635 que norma actualmente al Servicio de Inteligencia nacional recién tiene vigencia a partir del 24 de Julio de 1992; es decir, con posterioridad a los hechos.

15.4 Está indubitadamente demostrado que el Dr. Vladimiro Montesinos Torres, asesor ad honorem del SIN, no ha tenido ninguna intervención y/o participación en los sucesos materia de la investigación; toda vez que no tiene mando o relación de autoridad con personal militar ó policial, y sus actividades en el SIN se circunscriben a las tareas propias de su profesión de Abogado y Analista.

15.5 No se descarta la posibilidad que los autores de los hechos materia de la investigación sean elementos ajenos a las Fuerzas del Orden; lo que viene siendo investigado exhaustivamente en el Fuero Privativo Militar, en uso de sus atribuciones.

15.6 Que de las declaraciones y documentos recabados por la



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

Comisión se tiene la evidencia que en la UNE La Cantuta actúan grupos de estudiantes y profesores de diversas tendencias ideológicas quienes pretenden controlar dicha Universidad; dentro de estos grupos es visible la presencia de Sendero Luminoso. Está acreditado que dos de los desaparecidos realizan actividades en favor de Sendero Luminoso; es mas, el profesor Muñoz está requisitoriado en el Poder Judicial por delito de terrorismo, por lo que no se descarta que la sustracción de personas llevada a cabo el día 18 de Julio de 1992 pueda haber sido realizada por grupos terroristas discrepantes con los desaparecidos.

- 15.7 La hipótesis de la voluntaria desaparición es probable, considerando que de la información disponible por la Comisión, se aprecia que hay muchos casos de personas denunciadas como desaparecidas que, luego, han sido ubicadas en otros lugares, a los que se trasladan para no ser identificadas y realizar así actividades terroristas; apreciación que se demuestra con la aplicación de la Ley de Arrepentimiento, que ha posibilitado la desertión de algunos terroristas que habían sido declarados desaparecidos.

16. RECOMENDACION

Estando en curso un proceso penal por ante el Fuero Privativo Militar que se ha avocado jurisdiccionalmente al conocimiento de los hechos materia del trabajo de la Comisión RECOMENDAMOS al Pleno del C.C.D., remitir todo lo actuado y la documentación recepcionada por la Comisión al Consejo Supremo de Justicia Militar, para los fines de ley correspondientes.

Términos usados en este Informe


Desaparecidos:	La palabra desaparecido ha sido usado en este Informe como sinónimo de no habido.
UNE La Cantuta:	Se ha usado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta.



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

El profesor y los nueve estudiantes: con esta frase se debe identificar al profesor Hugo Muñoz Sánchez y los estudiantes: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Mariño Figueroa, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor y Heráclides Pablo Meza.

Lima, 24 de Junio de 1993


J. L. FREUND-THURNE


G. SIERRA

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO


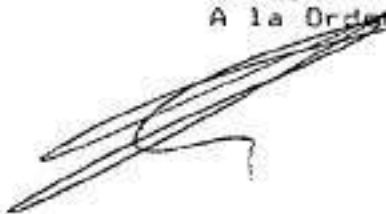
Lima, 25 de Junio de 1993

Aprobado el Informe contenido en el
Dictamen en Minoría.-----




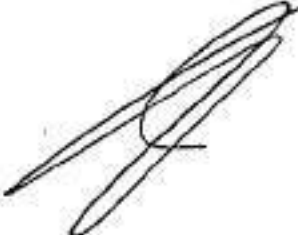


CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO
Lima, 25 de Junio de 1993
A la Orden del Dia.



CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO
Lima, 25 de Junio de 1993

En debate.- Rechazadas las Conclusiones y Recomendaciones
contenidas en el Informe en Mayoria.- Aprobadas las
Conclusiones y Recomendaciones contenidas en el Informe en
Minoria.-----
Tramites sin esperar la aprobacion del Acta.-----





CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

Lima, Junio 23 de 1993.

OFICIO Nº 067-93-CEIUC/CCD

Señor Ingeniero
JAIME YOSHIYAMA TANAKA
Presidente del Congreso
Constituyente Democrático
Presente.-



Señor Presidente:

En nombre y representación de la Comisión Especial Investigadora de la desaparición de un Catedrático y nueve estudiantes de la UNE "Enrique Guzmán y Valle" -La Cantuta-, tengo el agrado de elevar a Usted el Informe que ha sido elaborado por dicha Comisión, que ha sido materia del encargo que le confiara el Pleno.

En tal virtud, a Usted pedimos que dicho documento sea incorporado dentro de la Agenda de asuntos que deben tratarse en el Pleno del día viernes 25 del mes en curso, dejando constancia que alcanzaremos dentro de breves horas, por vía regular, el texto definitivo por su complejidad y extensión será concluido.

De Usted, muy cordialmente,

ROGER CACERES VELASQUEZ
Congresista de la Tercera Junta

RC/mg.

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

-00-

28a. SESION EFECTUADA EL DIA VIERNES 25 DE JUNIO DE 1993

-00-

Presidida por los señores Jaime Yoshiyama Tanaka.

Carlos Torres y Torres Lara y Rafael Rey Rey.

-00-

SUMARIO :

OFICIO : Del señor Reggiardo Sayán.

DICTAMENES : De la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
De la Comisión de Energía e Infraestructura.
De la Comisión de Defensa y Orden Interno.
De la Comisión de Presupuesto.
De la Comisión de Fiscalización.

INFORME : De la Comisión Especial Investigadora de desaparecidos en la Universidad "La Cantuta."

MOCIONES DE ORDEN DEL DIA : De los señores Donayre Lozano; Moreyra Loredó y Tudela Van Breugel-Douglas; Olivera Vega y otros; y Sandoval Aguirre y otros.

MOCIONES TRAMITADAS : De los señores Gamarra Olivares; Cáceres Velásquez y otros; y Chu Méiz.

ORDEN DEL DIA : Fue aprobado el proyecto que autoriza a los Concejos Provinciales para que en base a sus planes reguladores de rutas, pueden otorgar concesiones para regular el acceso a dichas rutas (Pág. 15).

Se reservó el debate del proyecto relacionado con el cambio de situación militar de los oficiales de reserva (Pág. 17).



En debate el proyecto por el que se restituye el Sistema Nacional de Peaje, se acordó la Cuestión Previa de pase a la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Desarrollo Social (Pág. 17).

Fue aprobado el proyecto por el que se designa al señor Victor Caso Lay en el cargo de Contralor General de la República (Pág. 20).

Se suspendió la sesión.

Siendo las 16 horas, continuó la sesión.

Fue aprobado el proyecto por el que se establece que los oficiales de reserva podrán obtener la efectividad en el grado (Pág. 27).

Fue aprobado el proyecto por el que se considera servicios públicos a los servicios portadores (Pág. 31).

Fueron aprobadas las conclusiones contenidas en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en la Moción de Orden del Día que solicita el esclarecimiento de las operaciones de la Empresa Blooming Strong Development Limited en Hong Kong (Pág. 31).

Fue aprobado el proyecto por el que se ratifica el Acuerdo de Bases y la Ayuda Memoria suscritos por los Ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas con America International Group Inc. y Enron Corp (Pág. 38).

Fueron aprobadas las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe en minoría de la Comisión Investigadora de desaparecidos en la Universidad "La Cantuta" (Pág. 47).

Se levantó la sesión.



presente ley y a dictar, mediante Decreto Supremo las disposiciones legales y administrativas complementarias que se requieran para viabilizar la cabal ejecución de los convenios que se celebren según la presente ley.

ARTICULO 82.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

Comuníquese, etc."

-00-


Seguidamente, se puso en debate las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe en mayoría de la Comisión Especial Investigadora de la desaparición de un cate-drático y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" - La Cantuta.

El señor PEASE GARCIA, como Cuestión de Orden, disintió de que se ponga en debate el tema a las 22 horas, en contravención del acuerdo del Consejo Directivo que fija dicha hora como límite para levantar la sesión, y solicitó que se postergue la discusión para otro momento.

El señor MARCENARO FRERS mostró su desacuerdo con la propuesta del anterior señor Congresista y precisó que la minoría parlamentaria venía reclamando que se trate el asunto en forma inmediata.

A continuación, el Pleno acordó debatir el referido informe por 39 votos a favor y 15 en contra.

El señor CACERES VELASQUEZ (Róger), Presidente de la Comisión Investigadora, fundamentó las conclusiones conteni-



das en el informe en mayoría, enfatizando, entre otros aspectos, que se había comprobado que el día 18 de julio de 1992 ingresó al campus de la La Cantuta personal armado a la usanza militar y seleccionó y detuvo a un profesor y a un grupo de estudiantes, el mismo que contó con apoyo de los efectivos militares acantonados en dicho centro de estudios. Asimismo, sostuvo que existen indicios que evidencian que se trató de una operación de inteligencia efectuada por una unidad especializada de las fuerzas de seguridad.


Por otro lado, expresó que estos hechos no son responsabilidad del Ejército como institución, por cuanto no se ha evidenciado el cumplimiento de órdenes jerárquicamente adoptadas, y manifestó que el Fuero Privativo Militar ha interferido con la labor investigatoria de la Comisión al impedir la concurrencia del abogado Vladimiro Montesinos Torres.

Prosiguiendo su intervención, hizo mención a las responsabilidades que se habrían encontrado como resultado de las investigaciones realizadas y manifestó que había presentado cinco proyectos de ley tendentes a evitar la repetición de este tipo de actos.

Finalmente, expuso el contenido de las recomendaciones del informe, donde se solicita la separación del señor General Nicolás de Bari Hermosa Ríos de los cargos de Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como la intervención del Ministerio Público e información sobre el abogado Vladimiro



Montesinos Torre. y se invoca que el Congreso mantenga la plenitud de las facultades de investigación que la Constitución le otorga.




El señor MOREYRA LOREDO, al expresar su pleno acuerdo con el informe en mayoría y señalar que la investigación no pudo completarse debido a la interferencia del General Hermoza Ríos, estimó que había quedado en claro la desaparición y el posible asesinato de 10 personas. Sostuvo que de no aprobarse el informe en mayoría se estaría incurriendo en delito de encubrimiento y sostuvo que el esclarecimiento de este tipo de hechos coadyuva a la lucha contra el terrorismo y a limpiar de sospecha al Ejército como institución.

El señor CUARESMA SANCHEZ afirmó que el informe en mayoría que había suscrito no pretende desprestigiar al Ejército Peruano como institución ni desestabilizar el sistema democrático. Asimismo, criticó las diversas acciones desplegadas por el General Hermoza Ríos para desviar y entrapar las investigaciones, enfatizando la necesidad de separarlo de los cargos de Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La señora HELFER PALACIOS, luego de ponderar la voluntad de los firmantes en mayoría por esclarecer los hechos en referencia, formuló diversas observaciones al informe en minoría, calificándolo de inconsistente y discrepando del valor que establece respecto de las pruebas testimoniales. Cuestionó que se pretenda manejar la hipótesis del autosequestro y abogó en favor de la aprobación del informe en



mayoría.



El señor SIURA CESPEDES, fundamentando el informe en minoría, precisó que en la Comisión Investigadora no se han actuado pruebas que establezcan las responsabilidades aludidas en el informe en mayoría ni la veracidad de los hechos referidos en los documentos apócrifos que originaron la investigación. Asimismo, señaló que no está probada la pre-existencia de los presuntos desaparecidos en el Campus de La Cantuta, en razón de que el profesor Hugo Muñoz Sánchez se encontraba con orden de captura, y ponderó la transparencia con que actuó la mayoría parlamentaria al conformarse la Comisión Investigadora con un número mayor de Congresistas de las minorías.

Por otro lado, cuestionó que en el informe en mayoría se tomen por ciertas todas las declaraciones de los testigos, no obstante las contradicciones que se evidenciaron en la Comisión, y consideró exageradas las acusaciones que se pretenden imputar al Ministerio Público, al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas y a la mayoría parlamentaria.

Finalmente, destacó la necesidad de remitir todo lo actuado por la Comisión Investigadora al Consejo Supremo de Justicia Militar, tal como se establece en la recomendación del informe en minoría.

El señor OLIVERA VEGA, luego de expresar su respaldo al informe en mayoría, sostuvo que la mayoría parlamentaria, el Gobierno y los altos mandos de las Fuerzas Armadas se han concertado para impedir la investigación, como lo



1978

evidencia el hecho de no haber otorgado a la Comisión las facilidades requeridas para el cumplimiento de su cometido. Opinó que hay hechos que indican que lo sucedido en La Cantuta fue un operativo que respondió a una cadena de mando. Adicionalmente, cuestionó el proceso que se viene siguiendo sobre el particular en el Fuero Privativo Militar, así como el contenido del informe en minoría, enfatizando que éste pretende encubrir al abogado Vladimiro Montesinos.

Fue interrumpido por el señor CUARESMA SANCHEZ.

Durante la anterior intervención, asumió la Presidencia el señor Carlos Torres y Torres Lara.

El señor FLORES-ARAOZ ESPARZA sustentó su acuerdo con el informe en mayoría, ponderando la labor realizada por la Comisión Investigadora no obstante las dificultades derivadas del acuerdo propiciado por la mayoría parlamentaria, que implicó la abdicación de la función fiscalizadora del Congreso. Sostuvo que había quedado demostrada la existencia y desaparición de un profesor y nueve alumnos de La Cantuta, como consecuencia de un operativo que habría contado con la complicidad o negligencia del destacamento asignado a dicho centro de estudios. Mostró su discrepancia con las hipótesis manejadas en el informe en minoría y consideró que la lucha antisubversiva debe enmarcarse dentro de la ley y la Constitución.

El señor FREUNDT-THORNE OYANGUREN, firmante del in-



forme en minoría, precisó que no existen pruebas que avalen las acusaciones contenidas en los documentos apócrifos que motivaron la investigación. Afirmó que el informe en mayoría carece de objetividad y ha manipulado las declaraciones testimoniales para encontrar supuestas responsabilidades dentro de los altos mandos militares. Finalmente, manifestó que no existían elementos de juicio para esclarecer lo sucedido en La Cantuta y relevó la necesidad de que continúen las investigaciones en el Fuero Privativo Militar.

El señor GARCIA MUNDACA, luego de considerar que la mayoría parlamentaria estaba actuando bajo consigna, rechazó que se insinúe que algunos sectores de la oposición pretenden desprestigiar al Ejército y están aliados con el terrorismo. Asimismo, expresó su preocupación por el ahondamiento de las diferencias entre la mayoría y minoría parlamentarias, estimando que ello no favorece el fortalecimiento del sistema democrático, y manifestó que cualquiera que fuera el resultado debe propenderse a que el Ejército sea respetado y no temido.

La señora HELFER PALACIOS, después de relevar la participación de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo, se ratificó en el informe en mayoría y consideró incorrecto deslegitimizar las pruebas testimoniales actuadas en la Comisión Investigadora.

El señor FERRERO COSTA, luego de estimar que no corresponde al Congreso señalar culpables ni actuar pruebas definitivas, expresó su preocupación por la dificultad de



encontrar un punto de equilibrio entre la tarea de pacificación y la efectiva defensa de los Derechos Humanos. En tal sentido, mostró su insatisfacción por los informes emitidos por la Comisión Investigadora y anunció que se abstendría de votar.

El señor PEASE GARCIA inició su intervención coincidiendo con las expresiones del anterior señor Congresista respecto de la necesidad de buscar un punto de equilibrio entre la pacificación y la defensa de los Derechos Humanos. Criticó la actitud de la mayoría parlamentaria sobre el particular, así como la renuncia del Congreso a su facultad fiscalizadora. Sostuvo que el informe en minoría es especulativo y obedece a la voluntad de entorpecer la investigación. Asimismo, expresó su coincidencia con el informe en mayoría y discrepó de algunas afirmaciones vertidas por los señores Siura Céspedes y Freundt-Thurne Oyangueren.

El señor CACERES VELASQUEZ (Róger) rechazó las críticas formuladas al informe en mayoría y abogó en favor de su aprobación, enfatizando que había actuado con objetividad al interior de la Comisión Investigadora.

El señor VICUNA VASQUEZ señaló que las conclusiones del informe en mayoría no concuerdan con las consideraciones que pretenden fundamentarlas. Asimismo, estimó que el informe en minoría no aportaba pruebas que conlleven al esclarecimiento de los hechos e invocó que se unifiquen los dos informes en una fórmula que incluya la recomendación b) del informe en mayoría y la recomendación final del de minoría.



Fue interrumpido por el señor CACERES VELASQUEZ (Roger), quien señaló que no sería posible compatibilizar ambos informes en los términos sugeridos por el anterior señor Congresista.

La señorita CHAVEZ COSSIO, luego de manifestar su solidaridad con los familiares de los desaparecidos, precisó las incongruencias del informe en mayoría, enfatizando que las Comisiones Investigadoras del Congreso tienen carácter político y que sus conclusiones deben estar orientadas en ese sentido. Al respecto, sostuvo que en dicho informe se asumen funciones jurisdiccionales que no son de competencia de la Comisión Investigadora, al establecer responsabilidades, incluso penales, de quienes presuntamente hubieran intervenido en los referidos hechos. Finalmente, opinó que el informe en mayoría pretende desprestigiar al Ejército, al Gobierno y al señor Presidente de la República.

El señor TORRES Y TORRES LARA afirmó que el informe en mayoría no presenta las pruebas que sustentan las responsabilidades que pretende establecer y que tiene el doble objetivo de buscar publicidad y de desestabilizar al Gobierno. Asimismo, señaló que más allá de los excesos que se cometen durante una situación de guerra, los cuales todos condenan, está la inevitable responsabilidad de la Representación Nacional por mantener la estabilidad del país.

El señor SIUBA CESPEDES reafirmó la necesidad de continuar la investigación en el Fuero Privativo Militar y presentó nuevas consideraciones en respaldo del informe en minoría.



En este estado, a pedido del señor CASTRO GOMEZ, se dio lectura a los incisos 1) y 3) del Artículo 49º del Reglamento.

Seguidamente, fueron desestimadas las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe en mayoría por 38 votos en contra y 13 a favor.

A continuación, fueron aprobadas las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe en minoría por 39 votos a favor y 13 en contra.

Sus textos son los siguientes:

"CONCLUSIONES GENERALES

14.1.- Se ha llegado a establecer que, cualquiera que fueran las circunstancias, situaciones o motivos, no ha sido posible ubicar al catedrático Hugo Muñoz Sánchez y a los nueve alumnos de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta, por lo que corresponde al Órgano Jurisdiccional, realizar las investigaciones orientadas a precisar el paradero de las citadas personas.

14.2.- Se ha llegado a establecer que los únicos elementos de juicio materiales con que ha contado la Comisión, han sido un documento anónimo presentado por el Congresista Henry Pease y una declaración hecha pública por el Gral. (R) Rodolfo Robles Espinoza, en la que repite las imputaciones del anterior documento apócrifo pero sin aportar prueba alguna que sustente su dicho.



14.3.- Además de estos dos elementos, la Comisión ha podido contar con las declaraciones de testigos (alumnos, profesores y familiares residentes de La Cantuta) las mismas que por las contradicciones e imprecisiones que contienen, no han permitido llegar a un conocimiento cabal de lo que pudo haber sucedido.

14.4.- Se ha contado asimismo con las declaraciones prestadas por el Comandante General del Ejército y el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, habiendo negado el primero que en la fecha de la presunta desaparición del catedrático y los estudiantes, su Comando y los escalones operativos de su institución no dispusieron y/o realizaron detenciones o acciones de rastillaje en La Cantuta; en cuanto al segundo, señala que su Organismo, por la naturaleza de las funciones que le señalaba la ley en aquella época, sólo producía Inteligencia Estratégica en el Campo Militar y no efectuaba operaciones de ningún tipo.

14.5.- No obstante las declaraciones de ambos jefes, existiendo el hecho real y concreto de no haberse logrado ubicar al profesor Hugo Muñoz y los nueve estudiantes, no deben descartarse varias posibilidades:

- a. Que un grupo paramilitar haya intervenido.
- b. Que un grupo terrorista, de ideología distinta, sea el responsable de la desaparición de estas personas.
- c. Que elementos de la misma tendencia, hayan salido sus discrepancias internas, procediendo a "desaparecer" a estas personas.



d. Que tanto el profesor Hugo Muñoz como los nueve alumnos, hayan decidido pasar a la clandestinidad, sea por sus simpatías con grupos violentos, sea por que estaban amenazados por éstos.

Sea como fuere, lo concreto es que la Comisión no ha tenido a la mano elementos de juicio válidos que permitan dar consistencia y credibilidad a cualquiera de estas posibilidades u otras que pudieran darse; razón por la que no está en capacidad de emitir un pronunciamiento determinando responsabilidades.

14.6.- Al lado de lo señalado, se puede afirmar sin la menor duda, que no le corresponde responsabilidad alguna al Ejército como Institución en los hechos investigados, por las siguientes razones:

a. Porque, justamente para proteger la vida y tranquilidad de profesores, alumnos y familiares, tenía acantonado un pequeño destacamento en la UNE.

b. Porque, en aplicación de la Estrategia de Pacificación, las Fuerzas Armadas vienen actuando dentro del más absoluto respeto a los Derechos Humanos. Si no fuera así, los numerosos cabecillas de grupos terroristas, no estarían ahora detenidos, en buen estado de salud y condenados a través de un juicio justo e imparcial.

c. Porque, la noche de los sucesos, no se produjo ningún desplazamiento de personal militar a la UNE para realizar algún operativo.

14.7.- Actualmente el Fuero Privativo Militar viene



conduciendo un proceso para investigar los hechos e individualizar a los presuntos responsables, a efecto de imponer las sanciones penales a que hubiere lugar; consecuentemente, al estar en pleno trámite la instrucción nadie puede avocarse al conocimiento de esa causa pendiente ni interferir el ejercicio de la función jurisdiccional militar. Por tanto mientras continúe la investigación judicial referida, dicho Fuero está impedido por mandato de la Ley de proporcionar, a persona ajena al proceso, información de cualquier naturaleza vinculada al caso que instruye por la reserva que tiene la instrucción de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Justicia Militar, que es norma de orden público y por ende de ineludible cumplimiento.

14.8.- Debe tenerse en consideración que la Justicia Militar es autónoma y en el ejercicio de sus funciones sus miembros no dependen de ninguna autoridad administrativa, sino de los Organismos Judiciales de mayor jerarquía. Por tanto, presumir que sus integrantes están sujetos a la influencia o subordinación de sus superiores militares, carece de sustento y cuestiona la majestad de un poder del Estado; más aún cuando los Magistrados Judiciales Militares constituyen un cuerpo colegiado y por imperio del Código de Justicia Militar se consideran Superiores Jerárquicos de cualquier miembro de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Señalar lo contrario, implica infringir la ley.

14.9.- Consecuentemente, esta Comisión sólo puede emitir conclusiones de naturaleza política, las mismas que por




el ámbito en el que se desenvuelven, pueden ser aceptadas, discutidas o cuestionadas políticamente, dentro del libre juego democrático. Pues el señalamiento de la responsabilidad penal es competencia única y exclusiva del Poder Judicial y en este caso específico del Fuero Privativo Militar, previo proceso en el cual se demuestre la culpabilidad de los encausados.

14.10.- En tal sentido, a esta Comisión no le corresponde establecer responsabilidades de carácter penal, bajo riesgo de incurrir en usurpación de funciones. Tanto más que, constitucionalmente, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

Por ello, el señalar la presunción de responsabilidad penal a priori, sin que haya habido un proceso penal previo dentro del fuero correspondiente, es incurrir en un exceso, que le quita seriedad al trabajo de la Comisión.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

15.1 Se ha llegado a establecer que toda acción u operativo que realiza el Ejército y la Policía Nacional, se hace como consecuencia de planes y de órdenes previamente impartidos a los escalones subordinados correspondientes. De acuerdo a las pruebas testimoniales e instrumentales recibidas por la Comisión, no existe elemento probatorio alguno que acredite que las Fuerzas del Orden y en particular el



Ejército o la Policía Nacional hayan efectuado algún tipo de intervención, operativo o rastrillaje en la UNE La Cantuta el día 18 de julio de 1982; por lo que actuando con un criterio de absoluta imparcialidad no es posible sostener que hayan sido las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional las que incursionaron en el referido Centro Superior de estudios el citado día y sustraído a las personas motivo de la investigación. En todo lugar, es al Fuero Privativo Militar que investiga jurisdiccionalmente los hechos, a quien corresponde identificar e individualizar a los responsables, precisar si son civiles o militares y aplicarles la sanción penal si fuere el caso.

15.2 De lo expuesto en la conclusión precedente, ha quedado plenamente demostrado que el Ejército Peruano como Institución, no tiene ninguna responsabilidad en los hechos materia de la investigación. Consecuentemente, el Comandante General, mando natural de la Institución tampoco tiene responsabilidad alguna en los hechos investigados por la Comisión.

15.3 Está igualmente comprobado que, el Servicio de Inteligencia Nacional, por mandato de la ley que lo regía en la época de los sucesos (Decreto Legislativo 271), por su organización y por las funciones que le son propias, tampoco ha tenido ninguna participación en los hechos investigados. Hay que puntualizar que el Decreto Ley 25635 que norma actualmente al Servicio de Inteligencia Nacional recién tiene vigencia a partir del 24 de julio de 1992; es de-



cir, con posterioridad a los hechos.

15.4 Está indubitadamente demostrado que el doctor Vladimiro Montesinos Torres, asesor ad honorem del SIN, no ha tenido ninguna intervención y/o participación en los sucesos materia de la investigación; toda vez que no tiene mando o relación de autoridad con personal militar o policial, y sus actividades en el SIN se circunscriben a las tareas propias de su profesión de abogado y analista.

15.5 No se descarta la posibilidad que los autores de los hechos materia de la investigación sean elementos ajenos a las Fuerzas del Orden; lo que viene siendo investigado exhaustivamente en el Fuero Privativo Militar, en uso de sus atribuciones.

15.6 Que de las declaraciones y documentos recabados por la Comisión se tiene la evidencia que en la UNE La Cantuta actúan grupos de estudiantes y profesores de diversas tendencias ideológicas quienes pretenden controlar dicha universidad; dentro de estos grupos es visible la presencia de Sendero Luminoso. Está acreditado que dos de los desaparecidos realizan actividades en favor de Sendero Luminoso; es más, el profesor Muñoz está requisitoriado en el Poder Judicial por delito de terrorismo, por lo que no se descarta que la sustracción de personas llevada a cabo el día 18 de julio de 1992 pueda haber sido realizada por grupos terroristas discrepantes con los desaparecidos.

15.7 La hipótesis de la voluntaria desaparición es probable, considerando que de la información disponible por



la Comisión, se aprecia que hay muchos casos de personas denunciadas como desaparecidas que, luego, han sido ubicadas en otros lugares, a los que se trasladan para no ser identificadas y realizar así actividades terroristas; apreciación que se demuestra con la aplicación de la Ley de Arrepentimiento, que ha posibilitado la deserción de algunos terroristas que habían sido declarados desaparecidos.

RECOMENDACION

Estando en curso un proceso penal por ante el Fuero Privativo Militar que se ha avocado jurisdiccionalmente al conocimiento de los hechos materia del trabajo de la Comisión recomendamos al Pleno del Congreso Constituyente Democrático, remitir todo lo actuado y la documentación recepcionada por la Comisión al Consejo Supremo de Justicia Militar, para los fines de ley correspondientes.

Términos usados en este informe.

Desaparecidos: La palabra desaparecido ha sido usado en este informe como sinónimo de no habido.

UNE La Cantuta: Se ha usado por la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta.

El profesor y los nueve estudiantes: Con esta frase se debe identificar al profesor Hugo Muñoz Sánchez y los estudiantes: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Bonales Cárdenas, Juan Nariño Figueroa, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Pe-



rea, Armando Osorio Córdor y Heráclides Pablo Meza.

-10-

Acto seguido, a solicitud del señor BLANCO OROPEZA, se acordó tramitar todos los asuntos aprobados en la presente sesión sin esperar la sanción del Acta.

Después de lo cual, el señor PRESIDENTE levantó la sesión.

Eran las 02 horas y 16 minutos del día sábado 26.

CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO
Lima 01 de julio de 1993
APROBADA.